



Problemas del Desarrollo. Revista
Latinoamericana de Economía
ISSN: 0301-7036
revprode@servidor.unam.mx
Universidad Nacional Autónoma de México
México

ROCHA GARCÍA, RICARDO

Antecedentes y perspectivas del narcotráfico en Colombia: una mirada a las políticas
Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, vol. 32, núm. 126, abril-julio, 2001,
pp. 59-109

Universidad Nacional Autónoma de México
Distrito Federal, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11820094004>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

ANTECEDENTES Y PERSPECTIVAS DEL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA: UNA MIRADA A LAS POLÍTICAS

RICARDO ROCHA GARCÍA*

RESUMEN

En este ensayo se analizan los antecedentes y las perspectivas del narcotráfico en Colombia, sus repercusiones sobre la economía y la estabilidad sociopolítica, especulando escenarios con y sin Plan Colombia, para lo cual se hizo una lectura de la literatura relevante y la actualización de algunas de las estimaciones realizadas por el autor. Se concluye que para Colombia cualquier estrategia antinarcóticos debe tener un diseño y una implementación integral, considerando la endogeneidad de la relación entre el conflicto armado y el narcotráfico.

Palabras clave: drogas ilícitas, narcotráfico, economía informal.

BACKGROUND TO AND PERSPECTIVES FOR DRUG TRAFFICKING IN COLOMBIA: A LOOK AT THE POLICIES

ABSTRACT

This essay explores the background to and the perspectives for drug trafficking in Colombia and its repercussions on the economy and socio-political stability. It also speculates on the scenarios with and without Plan Colombia, for which the author interpreted the relevant literature and updated some of his previous

* Investigador del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes. Estudio elaborado mediante el patrocinio del BID. Las opiniones, limitaciones y errores son responsabilidad exclusiva del autor, y no comprometen los valiosos comentarios recibidos de Javier León, Carolina Méndez, Moritz Kraemer, Manuel Fernando Castro, Gianpiero Renzoni y a los asistentes al seminario del Departamento Nacional de Planeación (DNP), así como de dos comentarios anónimos. Contacto: <rrocha@uniandes.edu.co>.

estimates. It concludes that any anti-drug strategy for Colombia must be integrally designed and implemented, given the endogenous nature of the relationship between the armed conflict and drug trafficking.

Key words: illicit drugs, drug trafficking, informal economy.

ANTÉCÉDENTS ET PERSPECTIVES DU TRAFIC DE STUPÉFIANTS
EN COLOMBIE: COUP D'OEIL SUR LES POLITIQUES
RÉSUMÉ

L'auteur de cet article étudie les antécédents et les perspectives du trafic de stupéfiants en Colombie, ses répercussions sur l'économie et sur la stabilité politique et sociale, envisageant des situations avec ou sans Plan Colombie. À cet effet, il a consulté la littérature sur le sujet et a procédé à une mise à jour de quelques-unes de ses évaluations. Pour la Colombie, conclut-il, toute stratégie de lutte contre les stupéfiants doit être une stratégie intégrale dans sa conception et dans sa mise en oeuvre, compte tenu du caractère endogène du rapport entre le conflit armé et le trafic de stupéfiants.

Mots-clés: drogues illicites, trafic de stupéfiants, économie souterraine.

INTRODUCCIÓN

Colombia tiene la quinta economía más grande de Latinoamérica, ha mostrado una larga secuencia de crecimiento económico, tiene un sector productivo crecientemente diversificado e internacionalizado, y además ha gozado de una larga trayectoria democrática. Las reformas políticas y económicas de principios de los años noventa del siglo XX dieron continuidad a la estabilidad macroeconómica y a la mejora en los indicadores de condiciones de vida. Sin embargo, muy poco de estos hechos trascienden a la opinión internacional, en medio de las numerosas informaciones relacionadas con el tema del narcotráfico y la criminalidad asociada. Pero no todo es un problema de desinformación.

Hacia finales de la década de 1990 el país se convirtió en el principal proveedor de drogas ilícitas de la región andina, su economía se había debilitado y su situación sociopolítica había empeorado considerablemente. Esta circunstancia motiva a indagar sobre la compleja relación del narcotráfico con la situación económica y social del país, para así pensar también en las perspectivas hacia el futuro.

Al respecto, existen muchas opiniones sobre cuáles han sido las repercusiones económicas y sociopolíticas del narcotráfico. Abundan los datos rápidamente contruidos, a saber: se piensa que el mercado de la droga es diferente a los demás, que la economía nacional depende de la repatriación de utilidades monumentales, y que las opciones de política son extremas o al menos imposibles

de poner en práctica. En contraste, los estudios económicos contradicen la mayoría de los mitos, y muestran que el tamaño del narcotráfico dentro de la economía colombiana es relativamente pequeño, aunque no despreciable, y dan un balance claramente desfavorable de su impacto.

Este ensayo aporta una mirada económica a los antecedentes y perspectivas del narcotráfico en Colombia, a la luz del Plan Colombia (PC), que se propone una reducción de las extensiones sembradas en cultivos ilícitos, como parte de un replanteamiento de la estrategia antidrogas que plantea una integración de las políticas de interdicción, a las de recuperación económica, fortalecimiento y desarrollo institucional, apoyo a la población más vulnerable y la negociación pacífica del conflicto interno.

En el primer apartado se presenta la evolución de la economía de las drogas en términos de sus principales desarrollos entre 1980-2000. En el segundo se muestra la magnitud de la repatriación de utilidades, los canales y su relación con la macroeconomía, sectores y regiones. En el tercer apartado se analizan los efectos del narcotráfico sobre la criminalidad y la estabilidad sociopolítica, y en el cuarto se hace una reflexión sobre el Plan Colombia: analiza los alcances del programa de atención de la población vulnerable al conflicto y del programa de desarrollo. Al final se recogen los puntos principales de la exposición y se presentan dos escenarios a futuro.

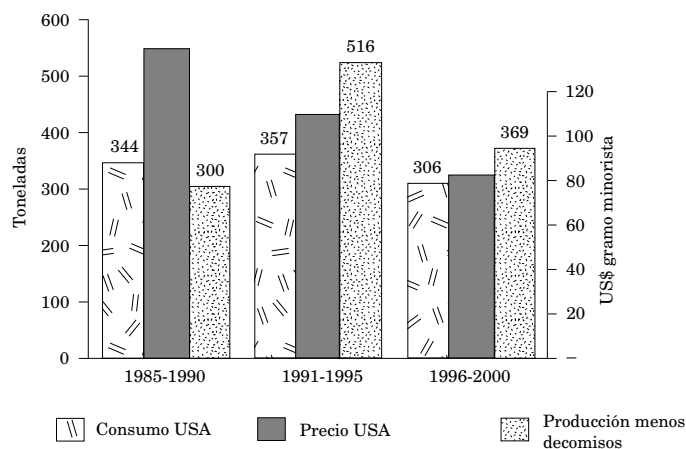
ANTECEDENTES DEL MERCADO Y DE LA INDUSTRIA

En Colombia, durante las últimas dos décadas, la mayor parte de las exportaciones de drogas ilegales ha correspondido a cocaína y su principal mercado de destino ha sido Estados Unidos. Paralelamente, la producción de marihuana se ha marchitado, la producción de heroína aún tiene un carácter incipiente y las ventas de cocaína a Europa han ganado participación.

En la década de 1990 el precio final de la cocaína¹ disminuyó como resultado de un retraimiento de su demanda y la popularidad de las drogas de origen sintético en Estados Unidos (gráficas 1 y 2). También se ha reducido la oferta (vía decomisos), y en el interior de la región andina los cultivos han migrado desde Perú y Bolivia hacia Colombia.

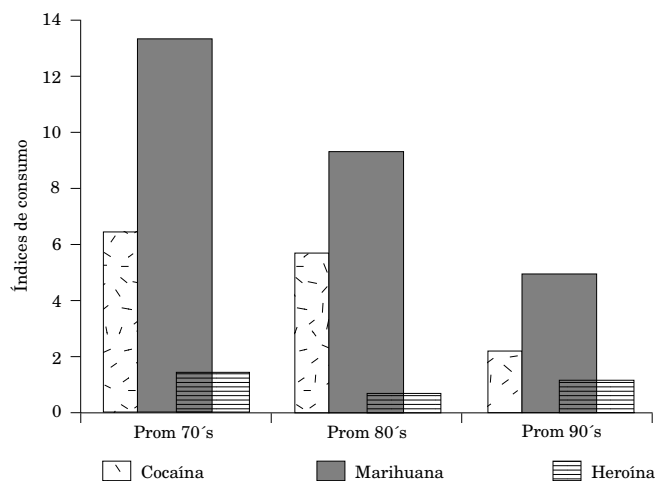
¹ En su estimación y análisis se utiliza la metodología empleada por Rocha (2000), que considera información relacionada con el control del mercado por parte de colombianos, costos de transporte, productividades de los cultivos, coeficientes de transformación, la erradicación de cultivos, el consumo, las exportaciones peruanas y bolivianas de base para cocaína hacia Colombia y que las exportaciones se valoran a los precios mayoristas. Se consultaron estadísticas de International Narcotics Strategy Control Report (INSCR), Departamento de Estado de Estados Unidos, Office of National Drug Control Policy (ONDCP), Policía Nacional, Dirección Nacional de Estupeficientes (DNE), United Nations Drugs Control Program (UNDCP).

GRÁFICA 1
MERCADO MUNDIAL DE LA COCAÍNA
(promedios anuales)



FUENTE: Rocha (2000), UNDCP, ONDCP, cálculos del autor.

GRÁFICA 2
ÍNDICES DE CONSUMO DE DROGAS EN ESTADOS UNIDOS
(promedios anuales)



FUENTE: ONDCP.

Lo ocurrido en el mercado de la cocaína puede recrear en un sencillo modelo de comercio de un mundo de dos economías con un solo bien (cocaína), una importadora y otra exportadora (Krugman y Obstfeld, 1999: cap. 9), donde la oferta de cocaína en el mercado de consumo es relativamente inelástica al precio, al igual que la demanda en la economía que la produce.

La gráfica 3 muestra tres escenarios de reducción del mercado, se utiliza un diagrama de tres cuadrantes, donde el izquierdo muestra el equilibrio de oferta y demanda (D-S), en la economía importadora (EU+UE); en el cuadrante de la derecha (D*-S*) aparece el mercado de la economía exportadora (Región Andina); y en el cuadrante de en medio está el equilibrio mundial entre la demanda de importaciones (Dm), y la oferta de exportaciones (Sx).

Ante una disminución de la demanda por importaciones, el precio internacional tiende a disminuir (gráfica 3a). Una caída en la oferta exportable ocasiona un repunte en el precio internacional (gráfica 3b). Pero una reducción simultánea en la demanda por importaciones y en la oferta exportable, asumiendo igualdad en las magnitudes y las elasticidades, no afectaría el precio internacional (gráfica 3c). En los tres escenarios se reduce el narcotráfico y el ingreso del país exportador.

Así, la reducción en el precio internacional y en el ingreso de los países exportadores, sería el resultado del efecto combinado de la disminución de la demanda en el principal mercado de consumo y el hecho de que la oferta disponible (producción menos decomisos) también hubiera disminuido. Visto de otra manera, el libre comercio (la interdicción) representaría un crecimiento (caída) en los ingresos para el país productor.

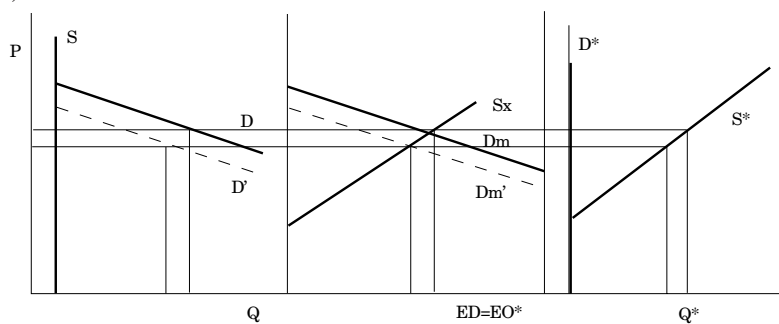
Sin embargo, rescatando la heterogeneidad de condiciones existentes en el interior de la región andina y las particularidades de la evolución del narcotráfico en Colombia, a continuación se hace un recuento de los principales desarrollos locales y regionales de la producción y exportación, para tener una mejor aproximación a sus inmediatas perspectivas.

La inserción de Colombia al tráfico de estupefacientes se remonta a mediados de la década de 1970 con la erradicación de cultivos de marihuana en México, que hizo posible que éstos se trasladaran a la costa norte del país, aprovechando el clima y las redes de contrabando de importaciones de bienes de consumo y de exportaciones de esmeraldas.

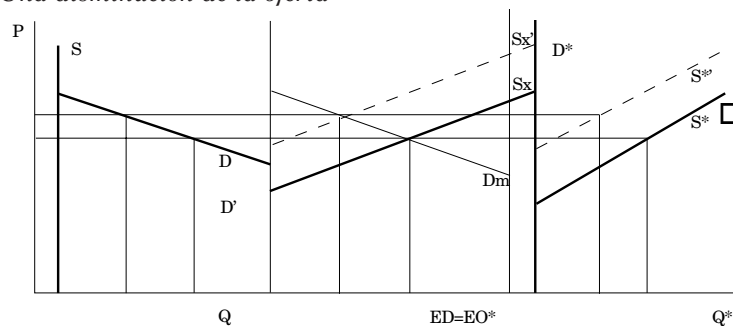
En la década de 1980 se inició la importación de base boliviana y peruana para cocaína, debido al auge de la demanda en Estados Unidos y la erradicación de cultivos colombianos de marihuana mediante fumigaciones. Durante la década de 1990, el cultivo de hoja de coca y el tráfico de cocaína hacen de Colom-

GRÁFICA 3
EL MERCADO MUNDIAL DE LA COCAÍNA EN UN MODELO
DE LIBRO DE TEXTO

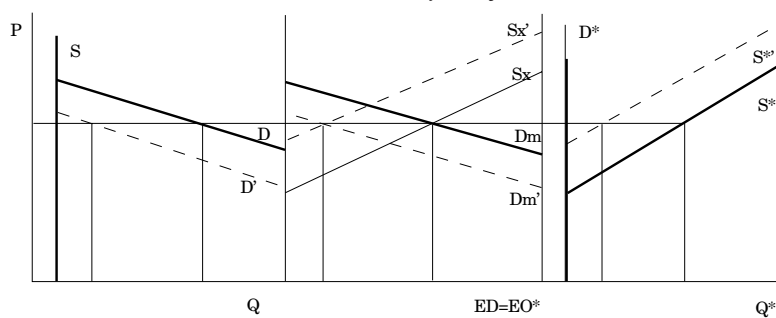
a) Una disminución de la demanda



b) Una disminución de la oferta



c) Una disminución simultánea en la oferta y la demanda



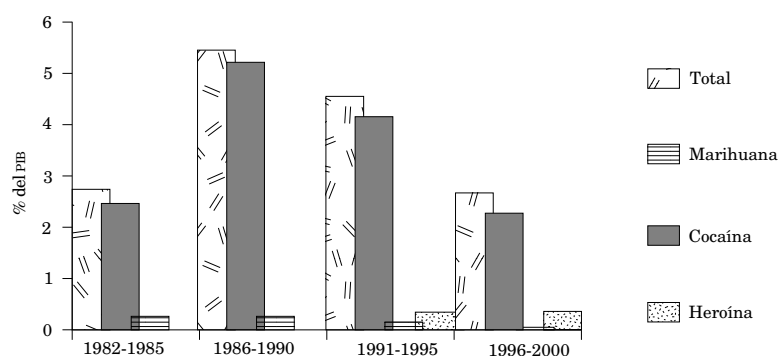
bia el principal productor mundial y su principal fuente de exportaciones ilegales, mientras que la producción de heroína sigue teniendo un carácter incipiente frente a la producción de Asia.

Las utilidades repatriables² por el narcotráfico se han reducido desde la segunda mitad de los años ochenta del siglo XX, cuando su tamaño frente al PIB promediaba un 5.5% del PIB a 2.5% en la segunda mitad de la pasada década, un nivel equivalente al estimado para principios de los ochenta (gráfica 4). Detrás de esta evolución se pueden caracterizar varias fases (gráfica 5) en la inserción de Colombia al narcotráfico.

Fase de cartelización (utilidades de 2.7% del PIB)

A principios de la década de 1980 la ventaja competitiva se construyó mediante el desarrollo de redes de comercialización hacia el mercado mayorista, la sustitución de importaciones de la materia prima y el acomodo frente a la institucionalidad tradicional. En este proceso, la búsqueda de economías de escala llevó a la conformación de la industria en unas pocas organizaciones exportadoras, comúnmente denominadas *cárteles*, que pudieran competir con organizaciones de otras nacionalidades y mejorar las condiciones del aprovisionamiento de materia prima importada.

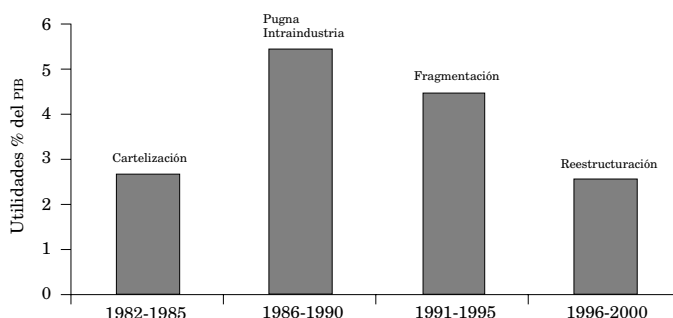
GRÁFICA 4
UTILIDADES REPATRIABLES POR EXPORTACIONES ILÍCITAS
(promedios anuales)



FUENTE: Rocha (2000), DNE, DNP, cálculos del autor.

² Diferentes de las utilidades potencialmente repatriadas, como se ilustrará en el siguiente apartado.

GRÁFICA 5
FASES DE LA INDUSTRIA DEL NARCOTRÁFICO



FUENTE: Rocha (2000), DNE, DNP, y cálculos del autor.

Fase de pugna intraindustria (utilidades de 5.5% del PIB)

En la segunda mitad de los ochenta, las organizaciones buscaron un mayor control de la oferta y la promoción de cultivos en el territorio nacional, lo que conllevó el desbordamiento de las utilidades repatriables, y la elevación de la presión sobre la institucionalidad tradicional para legitimar la acumulación de riqueza.

También en esta fase la búsqueda de la competitividad por medio de las economías de escala resultaba crucial. Por un lado, el desarrollo de nuevas rutas y el desplazamiento de quienes controlaban las existentes, debía lograrse mediante la consolidación de la industria en unas pocas, pero poderosas organizaciones, que tuvieran el suficiente poder de intimidación y corrupción para obtener costos medios decrecientes. Por otro lado, la expansión del área local sembrada de cultivos de hoja de coca entre múltiples productores, permitía un mayor control de la calidad y de los costos de la materia prima, eliminaba la intermediación de los acopiadores en Bolivia y Perú, y desde luego reducía el riesgo de la interdicción policial.

Durante este lapso se inició en el país uno de los periodos de mayor violencia del que se tenga conocimiento. Los esfuerzos de los narcotraficantes por preservar la riqueza acumulada y ampliarla, combinaron la intimidación y soborno del sector público (jueces y policías), legisladores, periodistas, políticos, sacerdotes, sindicalistas, activistas de izquierda y derechos humanos, guerrilleros reinsertados, etc. Se buscaba, de esta manera, preservar el estatus de santuario para sus inversiones y el negocio de exportación, frente a las ini-

ciativas de Estados Unidos y la comunidad internacional, por lograr una reducción en la oferta de narcóticos proveniente de la región andina, así como frente al repudio de diferentes sectores de la sociedad y la creciente persecución por parte del Estado.

Fase de fragmentación (utilidades de 4.5% del PIB)

En la primera mitad de la década de 1990 se avanzó en la escala de la confrontación con el Estado, lo que llevó a la desarticulación de los cárteles, la prisión para sus *lobbistas* y políticos simpatizantes, una aguda crisis de gobernabilidad y en las relaciones diplomáticas, por el financiamiento de dineros del narcotráfico en las elecciones de 1994. Para los exportadores locales ello significó un menor control del mercado mayorista y su desplazamiento por nuevos protagonistas nacionales e internacionales. Así, el extraordinario repunte de los cultivos en los años noventa es el resultado del desplazamiento de la búsqueda de la ventaja competitiva en las fases de cultivo y acopio.

Fase de reestructuración (utilidades de 2.6% del PIB)

Durante la segunda mitad de la década de 1990 se avanzó en la sustitución de importaciones, en medio de una reducción de las utilidades repatriables y Colombia como principal proveedor mundial de cocaína. Con la salida del mercado de Perú y Bolivia, las organizaciones exportadoras colombianas desarticuladas, la virulenta expansión de los cultivos ilícitos en zonas de frontera agrícola, encontraron protección en los grupos de extrema ideología que de paso les ofreció una fuente de financiamiento y una motivación para involucrarse en actividades de exportación.³

Así, la búsqueda de la competitividad en la fase agroindustrial estableció una conexión endógena entre el narcotráfico y el conflicto armado, donde las guerrillas y paramilitares, a pesar de tener raíces históricas e ideologías antagonistas, encontraron una fuente común de financiación en los impuestos a los cultivos y a la exportación, lo que les permitió una mayor acción militar entre ellas y contra el Estado, lo cual explica a su vez la escalada del conflicto interno y los magros resultados de las políticas de control de cultivos. Así, la proliferación de los cultivos ilícitos son fuente y resultado de la confrontación armada.

³ La captura de un narcotraficante brasileño reveló que un frente de las FARC controlaba el acopio y la exportación de la cocaína producida en el Guaviare, así como ingresos que podrían estar entre 10 y 12 millones de dólares. ("La confesión de Fernandinho", *Revista Semana*, núm. 991, 30 de abril-7 de mayo de 2001.)

El comportamiento de los precios y la distribución regional de los cultivos reflejan las transformaciones mencionadas. Por ejemplo, en la década de 1980, cuando la competitividad del negocio se originaba primordialmente en la fase de exportación, era mayor la participación de los precios mayoristas sobre el precio final, lo cual coincide con las fases de cartelización y fragmentación, luego, aquella disminuye con la reestructuración de la industria (gráfica 6). Mientras, en la siguiente década, la participación del costo de la base sobre el precio mayorista de la cocaína desciende a medida que la competitividad se busca en la fase agroindustrial y crecen los cultivos locales (gráfica 7).

Para el año 2000, el área cultivada con hoja de coca, extraoficialmente⁴ podía rebasar las 125 mil hectáreas en Colombia, lo que representaba ser el primer productor del mundo, con un 67% de la superficie mundial entre 1980 y 2000, proceso vertiginoso, si se considera que en 1990 era del 20%. Mientras tanto, en el resto de la región andina ocurrió lo contrario. Desde mediados de los años noventa, Bolivia implementó la política de reducir la oferta a la magnitud necesaria para atender la demanda interna de hoja de coca, mediante erradicación de 30 mil hectáreas manualmente por parte del ejército en la región del Chapare. Mientras que en el Perú, donde el cultivo también es permitido, los controles aéreos, los mayores costos y menor calidad obtenida de los acopiadores peruanos,⁵ sumada a la sustitución de cultivos en Colombia dieron como resultado un marchitamiento del área dedicada a la exportación en el Alto Huallaga (Cabieses, 1999) y el abaratamiento de la base para cocaína.

De acuerdo con lo anterior, las perspectivas del mercado y la industria en el mediano plazo podrían corresponder a los siguientes escenarios.

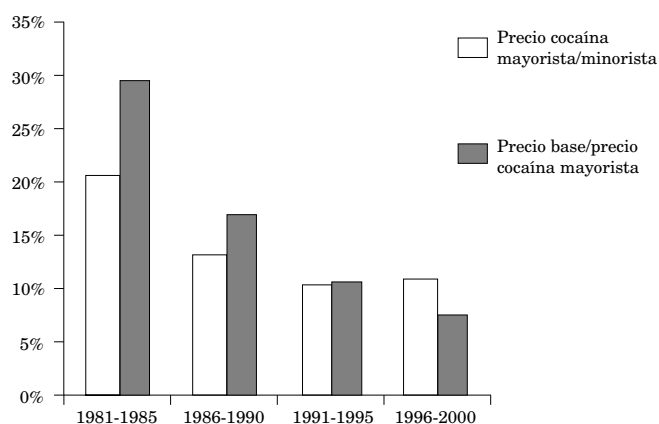
- Sin Plan Colombia (PC), y si el mercado mundial de la cocaína profundiza en sus tendencias recientes, es de esperarse que los ingresos continúen disminuyendo, en medio de un mayor crecimiento de los cultivos, una creciente participación de los grupos alzados en armas en la exportación y una mayor intensidad en el conflicto armado.
- Con PC, una solución negociada al conflicto armado y una reducción del 50% en la extensión cultivada localmente, se introduciría un déficit de oferta de 270 toneladas en el mercado mundial de cocaína y eventualmente se daría

4 De acuerdo con la nueva metodología satelital del Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos del gobierno de Colombia y la ONU, se reportaron 162 mil hectáreas para el año 2000 (*Revista Cambio*, semana del 14 al 21 de mayo de 2001). Esta información no se incorporó en las estimaciones y análisis de este ensayo.

5 Francisco Reyes, "Los pactos de Montesinos", en revista *Gatopardo*, febrero de 2001.

un repunte en el precio, que abriría el retorno de Perú y Bolivia a la exportación (gráfica 3b). En este escenario la paz es una condición necesaria para el éxito de la interdicción, pues de lo contrario se experimentarían los efectos indeseados de las políticas anunciadas con demasiada anticipación a su efectiva implementación: ante una eventual erradicación, los cultivos se propagarían con una rapidez inusitada, que desbordaría las disponibilidades de recursos, lo cual pone de manifiesto que en la credibilidad del PC jugará un papel determinante la sincronización de las diferentes estrategias y la eficiencia de su implementación.

GRÁFICA 6
COSTO DE LA MATERIA PRIMA
PARA EL MAYORISTA Y EL MINORISTA



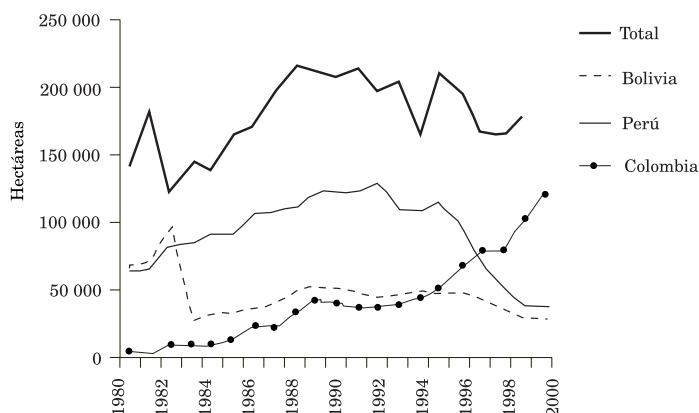
FUENTE: Rocha (2000), ONDCP, y cálculos del autor.

LA REPATRIACIÓN Y SUS EFECTOS ECONÓMICOS

Las utilidades repatriables mencionadas en el apartado anterior no han sido necesariamente las utilidades repatriadas. En Colombia, al igual que en el resto del mundo, la repatriación de capitales ilegales se encuentra limitada a las posibilidades de lavado de activos, dadas por la informalidad de las transacciones internacionales, las medidas de control, al igual que el tamaño y la estructura de la economía.

Desde la época de la economía cerrada, los flujos de capitales encubiertos (FCE) —contrabando abierto de importaciones y divisas, sobre y subfactura-

GRÁFICA 7
ÁREA DE HOJA DE COCA EN PAÍSES ANDINOS



FUENTE: Policía Nacional, INSCR, varios números.

ción del comercio y las operaciones de la cuenta de servicios— eran los canales más recurridos para movilizar capitales legales para eludir controles cambiarios y fiscales, así como para introducir capitales ilegales, los cuales han sido materia de estudio y estimación (cuadro 1). Desde la apertura de la cuenta de capitales, es posible que nuevas modalidades de lavado se hayan sumado a los canales tradicionales, sin que se tenga información de su estimación y magnitud.

CUADRO 1

Autores	Periodo	Utilidades (% del PIB)	
		Repatriables	Repatriadas
Caballero y Junguito (1978)	1970-1977	2.7	1.4
Gómez (1988)	1981-1985	3.0	n.d.
Gómez (1990)	1981-1988	4.0	2.4
Kalmanovitz (1990, 1992)	1976-1988	11.0	6.6
Sarmiento (1990)	1981-1988	4.0 y 10.0	2.5
Steiner (1997)	1982-1995	5.0	5.0
Rocha (1997)	1985-1994	2.0 y 10.0	3.3
Rocha (2000)	1982-1998	4.0	2.9

FUENTE: Estimaciones de utilidades repatriables y repatriadas por el narcotráfico.

Los FCE representan un techo para la absorción de utilidades del narcotráfico, donde actúan aspectos estructurales de la economía. La propiedad industrial y financiera es cerrada y se encuentra concentrada en una docena de conglomerados empresariales. Pese a la evidente predilección de los mafiosos por las edificaciones suntuosas y las presiones inflacionarias derivadas de sus compras, su penetración sectorial no fue tan alta puesto que la construcción está dotada de un esquema de financiamiento institucional, sujeto a requisitos de información.

En cambio, no han existido diques para las inversiones de narcotraficantes en el sector rural y en la economía informal, donde la deficiente titulación de la propiedad rural y los atrasados sistemas de registros, junto a la extorsión de los propietarios tradicionales por parte de los grupos de extrema ideología, facilitaron compras de tierras en lo que se ha denominado como una contrarreforma agraria. Otro tanto ocurrió con el comercio informal, el sector hotelero y los juegos de azar, dada la prevalencia de las transacciones en efectivo.

Los trabajos del cuadro 1 tienen en común que detallan las metodologías y las fuentes de información utilizadas para el cálculo de las utilidades repatriables, y estiman los ingresos netos a partir de exportaciones valoradas al precio mayorista, con una excepción (Kalmanovitz, 1990 y 1992). La consistencia entre la oferta y la demanda de cocaína a partir de las estimaciones de consumo en Estados Unidos y del control del mercado mayorista atribuido a las mafias colombianas, es reciente (Steiner, 1997). Igualmente ocurre con las estimaciones de la demanda en Europa, el costo del lavado de activos, estimación de las importaciones de base, así como la revisión de las metodologías para los ingresos de marihuana y heroína (Rocha, 2000).

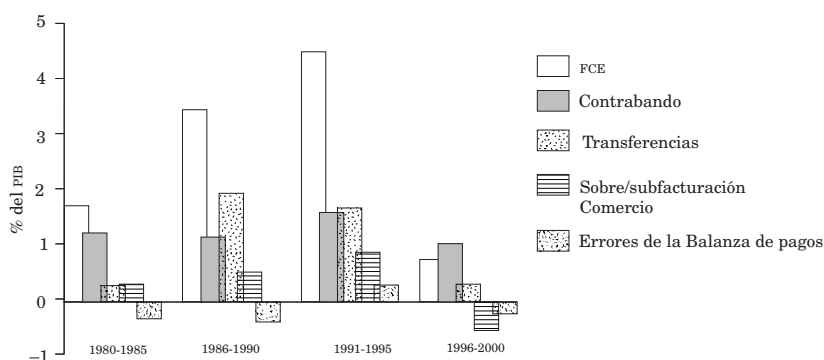
Por el lado de la repatriación, las metodologías resultan heterogéneas. Para la sobre y subfacturación del comercio se estima contrastando registros de Colombia y los de sus socios comerciales (Rocha, 1997 y 2000; Steiner, 1997); índices de *quantum* y de precios (Sarmiento 1990, Kalmanovitz, 1990 y 1992); para el contrabando, encuestas (Caballero y Junguito, 1978), funciones de importaciones (Rocha, 1997), diferencias con registros de la Zona Libre de Colón (Steiner, 1997), y para la repatriación de transferencias una estimación en función del ingreso de la emigración (Rocha, 1997).

De los principales resultados de la actualización del trabajo de Rocha (2000) se tiene que para 1982-2000, los ingresos netos repatriables de los narcotraficantes habrían oscilado en torno a un 4.4% del PIB (gráfica 8), con una visible disminución en los años noventa del siglo XX, hasta descender a un promedio del 2.6% durante el último trienio, de los cuales tres cuartas partes (3% del PIB)

habrían sido repatriados por medio de las transferencias, el contrabando abierto de importaciones y en menor medida mediante la sobre y subfacturación del comercio; el resto, presumiblemente habría financiado la fuga de capitales.

Entre 1991 y 1995 los FCE pudieron ser utilizados para ingresar la mayor parte de las utilidades del narcotráfico (gráfica 9), sin embargo, en la segunda mitad de los años 1990, es posible que una parte del exceso de los ingresos repatriables sobre los FCE (en promedio 1.2 del PIB desde los años 1980) se haya quedado en el exterior, dedicado a financiar la fuga de capitales y en alguna medida también permeó la cuenta de capitales por medio de operaciones financieras internacionales, que por su complejidad y tecnología son muy difíciles de controlar, a pesar de que la legislación y los controles locales homologan los estándares internacionales.⁶

GRÁFICA 8
FLUJOS DE CAPITAL ENCUBIERTOS Y UTILIDADES REPATRIABLES
(promedios anuales)

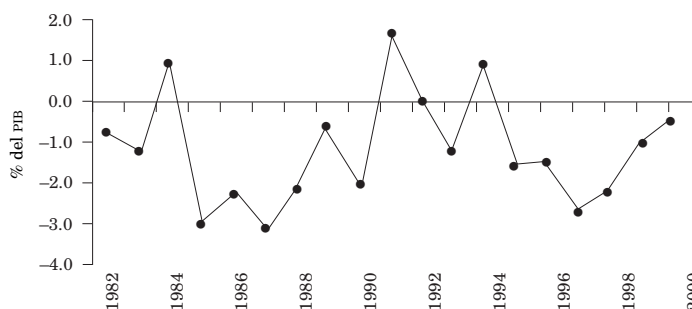


FUENTE: Rocha (2000) y cálculos del autor.

Entre 1992 y 2000, del total de inversión extranjera directa 34% correspondió a Centroamérica y el Caribe, donde se sabe que proliferan paraísos fiscales que ofrecen numerosas ventajas a capitales de toda procedencia. Además, los cambios ocurridos en el interior de la industria se deben haber reflejado

6 El Subcomité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, con base en un estudio realizado sobre lavado de activos en 2000, concluyó que importantes bancos estadounidenses, al no cumplir cabalmente con la legislación, están permitiendo que sus bancos corresponsales en Colombia dejen filtrar sin control dinero proveniente del narcotráfico. ("El control bancario de E.U. es permisivo", en *El Tiempo*, jueves 8 de febrero de 2001.)

GRÁFICA 9
UTILIDADES REPATRIADAS MENOS REPATRIABLES
(% del PIB)



FUENTE: Rocha (2000), DNP, y cálculos del autor.

sobre la repatriación, pues la fragmentación ha hecho menos visibles las operaciones del lavado.

¿Cuáles son los nuevos canales de repatriación en una economía abierta y los eslabonamientos con el resto de la economía con una industria fragmentada en pequeñas organizaciones? ¿Cuál es la efectividad de las políticas contra el lavado de activos para reducir la capacidad de absorción de los capitales repatriados por el narcotráfico? ¿La fragmentación de la industria implicaría menor corrupción y mayor violencia? Si la compra de tierras es la inversión preferida, ¿qué intervención necesitaría el mercado de tierras? Si las políticas contra el contrabando y el lavado en el sistema financiero homologan e incluso sobrepasan los estándares internacionales, ¿cuál debería ser la cooperación internacional?

Las políticas enfrentan un importante reto institucional en los numerosos vasos comunicantes entre el narcotráfico y la economía legal, por medio de los mercados informales de divisas, de crédito, de mercancías y de tierras. De la experiencia colombiana, se sabe que la preferencia de los canales para la repatriación y los patrones de inversión, se encuentran favorecidos por la inexistencia o precario registro de las transacciones y de los derechos de propiedad, como prevalece en la economía informal.

En Colombia los flujos de capitales conservaron la identificación económica y personal de las transacciones. Existe un impuesto al arbitraje de divisas entre el mercado paralelo y el regulado, y un margen de intermediación cambiaria, que encarecen la repatriación de utilidades a través de la cuenta de capi-

tales. En materia de comercio exterior, los esquemas preferenciales tributarios y administrativos, sujetos a identificación, han disminuido las oportunidades de lavar activos mediante la sobre y subfacturación del comercio. Otro tanto ha sucedido con los programas adoptados por el sistema financiero y el mercado de capitales para la identificación de las transacciones. Los convenios de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (Dian) con las multinacionales han logrado disminuir sustancialmente la oferta de contrabando de importaciones.

Sin embargo, faltaría avanzar en la cooperación internacional para lograr homologación tanto de legislaciones como en la ética de los negocios internacionales, así como en la modernización de los sistemas de registros de la propiedad inmobiliaria y la creación de mercados de tierras. También la capacidad de lavado disminuiría en la medida en que se reduzca la evasión fiscal y se amplíe la cobertura de la base gravable.

Respecto a los efectos económicos del narcotráfico, la sabiduría convencional y los trabajos realizados no comparten la misma visión. La primera ha sido enriquecida por datos rápidamente contruidos y de *opiniones informadas*, donde se destaca el éxito empresarial de los narcotraficantes colombianos, sus fortunas fabulosas, las posibilidades de redención social de sectores marginados de la población, los vínculos con segmentos de la clase empresarial y política colombiana, y una explicación para que el desempeño macroeconómico del país, durante los años ochenta del siglo xx, fuera destacable dentro de la región.

Los trabajos de los economistas fueron motivados en la verificación empírica de la sabiduría convencional, la búsqueda de la interpretación económica a la problemática de un país productor con una demanda externa dada, y a la presencia de externalidades negativas y positivas, donde la principal dificultad encontrada por los autores ha sido la información estadística y el diseño de metodologías de medición.

A partir de los años ochenta del siglo xx, la propensión de los narcotraficantes a invertir en propiedades rurales y de construcción era tan evidente, que se presumía que su dinámica estuviese muy influenciada por la repatriación de utilidades (Sarmiento y Moreno, 1990; Giraldo, 1990). También se le atribuían efectos locales o regionales en el salario real de las regiones productoras, variaciones en los depósitos del sistema financiero, y en las tasas de desempleo. Kalmanovitz (1990 y 1992) nos reveló impactos positivos sobre la infraestructura y la tecnología del sector pecuario, así como también sobre la inversión de propiedad raíz urbana, medios de comunicación, cadenas de farmacias, y algunas empresas industriales.

Por entonces, se entendía que los efectos de naturaleza macroeconómica se daban mediante la especulación en vivienda suntuaria —con desfavorables efectos sobre la inversión y el crecimiento—, y a través de la mayor oferta de divisas en el mercado paralelo, por una parte aumentando el contrabando de importaciones y deteriorando la actividad industrial, y por la otra, financiando la fuga de capitales (Gómez, 1988). El dinero de la cocaína se había dedicado a la financiación del contrabando y la informalización del comercio exterior, el turismo exterior y la fuga de capitales, actividades que en nada contribuían al crecimiento económico y complicaban el manejo macroeconómico (Urrutia, 1990).

Los posibles efectos de la repatriación sobre la composición del producto, mediante la tasa de cambio, no han resultado evidentes. A comienzos de la década de 1990 se preveía que la *enfermedad holandesa* vía narcotráfico se daría a medida que la economía se internacionalizara (Sarmiento, 1990 y 1991). No obstante, a esa previsión poco ayudaba el carácter permanente de los flujos, sus bajos eslabonamientos con el resto de la economía y su tenue impacto sobre los ingresos fiscales (Thoumi, 1994). Además, la repatriación se canaliza en forma importante por el mercado negro, y los efectos de la repatriación de capitales del narcotráfico sobre el *premium cambiario* han sido irrelevantes por la baja convertibilidad a pesos (Steiner, 1997). De hecho, son relativamente reducidas las ventas de dólares de las casas de cambio al mercado oficial (Rocha, 2000).

Para la segunda mitad de la década de 1990, la expansión de los cultivos revelaba un vínculo más estrecho con la economía y la estabilidad sociopolítica de las regiones: la fase agroindustrial del narcotráfico generaba 40 mil empleos directos al año y la creciente dependencia financiera de la guerrilla (Uribe, 1997). También la encuesta municipal de compras de tierras por parte del narcotráfico, elaborada por Reyes, daba a conocer una contrarreforma agraria (1997).

De acuerdo con las consideraciones anteriores, y una actualización de las estimaciones de Rocha (2000), se elabora a continuación un recuento de las repercusiones macroeconómicas sectoriales y regionales del narcotráfico para el periodo 1980-2000.

A primera vista la repatriación de utilidades por ventas de cocaína, heroína y marihuana se podrían catalogar como otra exportación agroindustrial, con una cifra cercana a las exportaciones de café, banano y flores (2% del PIB para 1996-2000), pero sus eslabonamientos con el resto de la economía son de una menor intensidad, por la visible preferencia de los mafiosos por el consumo suntuario y las inversiones especulativas.

Del examen de las exiguas correlaciones entre las utilidades repatriadas y su potencial repatriación con el PIB legal, se desprende que las repercusiones no resultan evidentes. Los débiles eslabonamientos con la economía legal y su reducida capacidad de absorción de la repatriación de capitales, han determinado que el narcotráfico no haya dinamizado de manera sistemática la economía legal (gráfica 10). Mediante los flujos de difícil explicación (contrabando, transferencias y sobrefacturación), también se repatrian capitales de orígenes diferentes al narcotráfico, que desean eludir el pago de impuestos y hacer arbitraje cambiario.

Tampoco resultan visibles los efectos sobre la determinación del ITCR y el *premium cambiario*. De acuerdo con los estudios realizados, estas dos variables son explicadas igualmente que en economías donde no opera el narcotráfico (Steiner, 1997). Además, hay que señalar que con la liberalización del mercado cambiario a principios de la década de 1990, se conservaron los registros de la identificación de los operadores y se estableció un impuesto para su ingreso al mercado cambiario legal, cuya magnitud explica el *premium negativo* de la tasa de cambio paralela con respecto a la oficial en los años noventa del siglo xx.

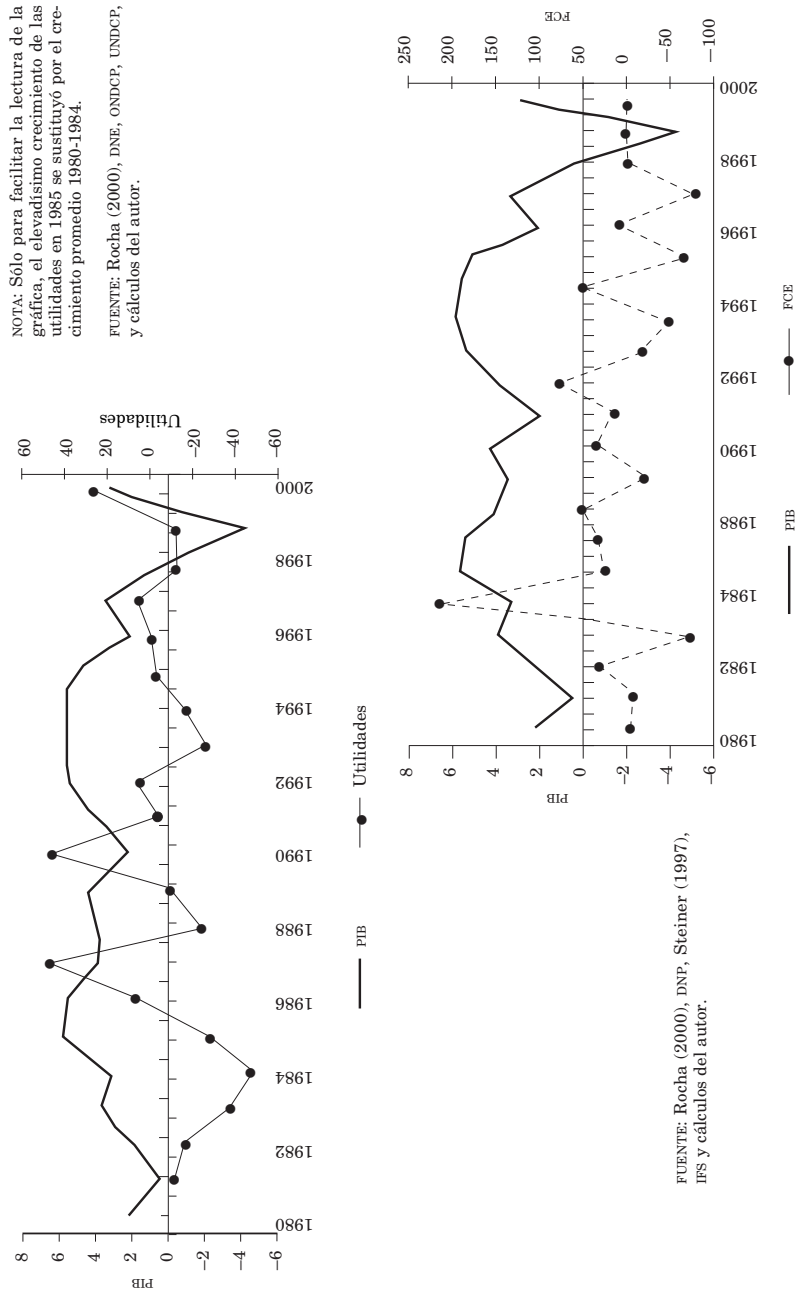
Esta desregulación significó una ampliación del mercado cambiario, en el que las transacciones pasaron de representar 33% del PIB en la década de 1980, a 38% durante los años noventa (la suma de ingresos y egresos de la balanza cambiaria). Si se le adicionan las cuentas corrientes en el exterior, esta magnitud superaría el 170% del PIB (gráfica 11).

En consecuencia, la magnitud de las divisas negras disminuyó en la última década del siglo pasado no sólo en términos del PIB, sino también con respecto al tamaño del mercado. La relación de utilidades repatriables sobre transacciones del mercado cambiario pasó de 12% a 5% durante el periodo 1980-2000. Igualmente, el exceso de utilidades repatriables sobre los FCE disminuyó de 1.5% del PIB a 0.8%. Era de esperarse que al disminuir la presión de la repatriación por ingresar a la economía, la tasa de cambio paralela debería aumentar, pero ocurrió lo contrario. Así, estas magnitudes tampoco ayudan mucho a la presunción de que detrás del *premium* negativo, la libertad de la cuenta de capitales amplió los efectos depresivos del narcotráfico sobre la tasa de cambio (gráfica 12).

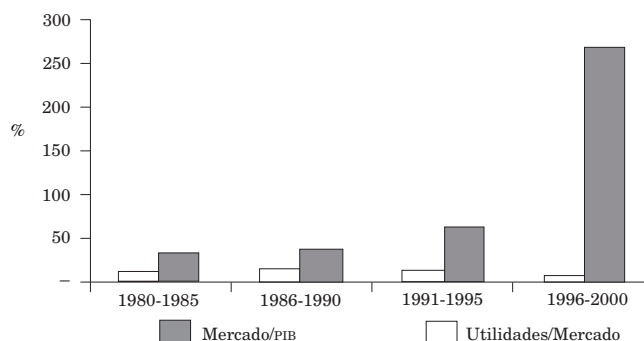
Desde el punto de vista contable,⁷ la incursión de Colombia al narcotráfico contribuyó en la recomposición de su balanza de pagos, producto de la repa-

7 Un ejercicio que podría abordarse mediante un modelo de equilibrio general computable (Hernández y otros, 2001).

GRÁFICA 10
 UTILIDADES DEL NARCOTRÁFICO, FLUJOS DE CAPITALES ENCUBIERTOS Y PIB
 (tasas anuales de crecimiento, precios de 1998)

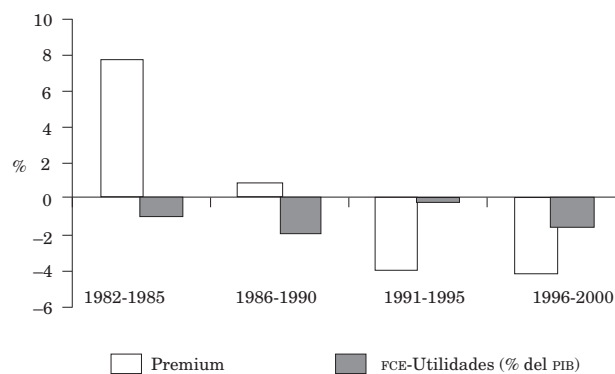


GRÁFICA 11
TRANSACCIONES DEL MERCADO CAMBIARIO



FUENTE: Banco de la República, Rocha (2000) y cálculos del autor.

GRÁFICA 12
UTILIDADES REPATRIABLES, REPATRIACIÓN
Y PREMIUM CAMBIARIO



FUENTE: DNP, Rocha (2000) y cálculos del autor.

triación de utilidades (3% del PIB), como también del balance macroeconómico, principalmente en la medición de la cuenta de capitales, del ahorro privado y del PIB. Si se incorpora el valor de la fase agroindustrial, el PIB debió haberse incrementado hasta 3.5% en promedio durante las últimas dos décadas del siglo pasado.

Lo anterior, sumado al hecho de que el narcotráfico no ha representado un *boom* exportador transitorio, explica que no se le puedan atribuir cambios en la

composición sectorial. Una mirada a un índice de enfermedad holandesa (PIB agrícola e industrial *vs.* PIB total) frente a los FCE, no muestra la correspondencia esperada.

Pese a las elevadas magnitudes de la repatriación en la década de 1980, el índice de enfermedad holandesa (IEH) no cayó (gráfica 13), mientras que en los años noventa, ambos disminuyeron, dejando en claro que la recomposición del producto a favor de los no transables correspondió en muy poco al narcotráfico, y en cambio obedeció fundamentalmente al repunte en la demanda doméstica ante las expectativas creadas por las exportaciones petroleras a comienzos de la última década del siglo pasado. De hecho, las exportaciones con mayor sensibilidad a la tasa de cambio real (no tradicionales o diferentes a minería y café), crecieron durante el periodo 1980-2000 a una tasa promedio del 8% y ganaron participación sobre la oferta exportable del 35% al 45 por ciento.

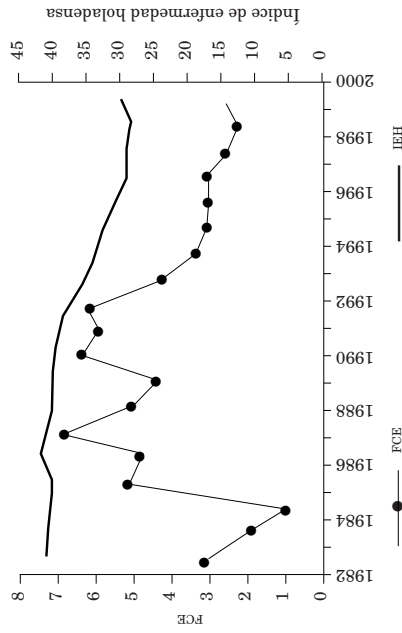
El narcotráfico tampoco ha tenido efectos sistemáticos regionales y sectoriales. Pese a que a menudo se argumenta la presencia de efectos sobre la composición del producto en el ámbito sectorial y regional, las correlaciones con los PIB sectoriales de la construcción, el sector financiero y el comercio, no permiten apreciar nexos de consideración. En el caso de la construcción, su comportamiento va en contra de la repatriación, lo cual no favorece la tesis de que la construcción se benefició en forma generalizada con el narcotráfico. Es cierto que los nichos de construcción suntuaria vivieron procesos especulativos debido a compras del narcotráfico; sin embargo, existen evidencias de que la dinámica del sector ha respondido a determinantes propios de economías sin narcotráfico (Rocha, 2000).

La relación entre el desempeño del sector agropecuario y los FCE no resulta sorprendente si se considera que las inversiones de narcotraficantes en propiedades rurales se han orientado a la especulación inmobiliaria, en regiones controladas por la guerrilla y con precaria acreditación de su propiedad. Asumiendo compras del 10% y 20% de la superficie en los municipios que reportan compras de tierras por parte de narcotraficantes (Reyes, 1997), de una subvaluación del 40% del precio catastral *vs.* el precio comercial, se obtendrían estimaciones de 2.2 millones de hectáreas (US\$ 1.2 millones*) y 4.4 millones de hectáreas (US\$ 2.4 millones), es decir, entre el 5% y el 11% del área de las propiedades rurales (Rocha, 2000).

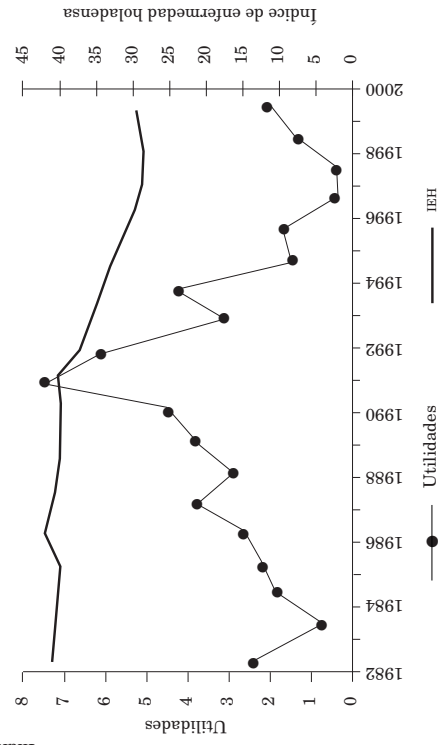
La importancia económica del narcotráfico sobre algunas economías regionales ha sido significativa, principalmente donde hay cultivos, pues los efectos del narcotráfico no se reflejan en regiones sede de las organizaciones exportado-

*Miles de millones.

GRÁFICA 13
ENFERMEDAD HOLANDESA, UTILIDADES REPATRIADAS Y REPATRIADAS (% DEL PIB)



FUENTE: DNP, Rocha (2000) y cálculos del autor.



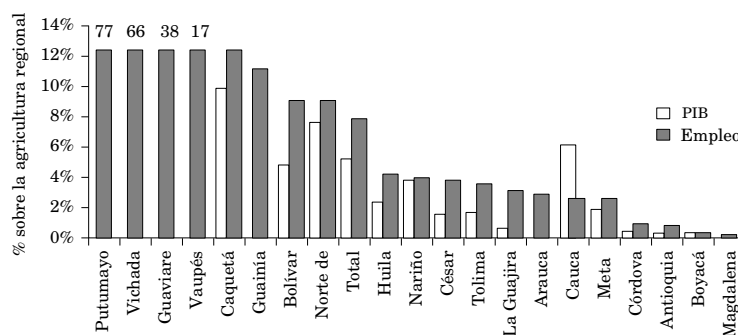
FUENTE: DNP, Rocha (2000) y cálculos del autor.

IEH=Índice de enfermedad holandesa, UTNARC=Utilidades repatriables, FCE=flujos de capital encubiertos.

ras, y tampoco en aquellas preferidas para sus inversiones; al parecer, porque allí el lavado de activos se destina a financiar la fuga de capitales y el contrabando.

Las regiones con cultivos ilícitos se caracterizan por tener economías atrasadas, predominan las actividades primarias, tienen zonas de colonización y ganadería extensiva, son menores las dotaciones institucionales y de infraestructura, al igual que los niveles de capital humano y social, y registran elevados índices de inestabilidad sociopolítica. Para el año 2000 los cultivos ilícitos habrían tenido una producción valorada en 350 millones de dólares, equivalentes al 5% del PIB agrícola y al 8% del empleo agrícola (69 mil empleos directos) de las regiones productoras (gráfica 14).

GRÁFICA 14
CULTIVO ILÍCITOS POR REGIONES EN 2000
(PIB y empleo)



NOTA: para facilitar la lectura de la gráfica en el caso de Vichada, Putumayo, Guaviare y Caquetá, las barras no corresponden a los % sobre empleo; tampoco tienen % sobre el PIB.
FUENTE: DNE, Rocha (2000) y cálculos propios.

Sin lugar a dudas la estabilidad sociopolítica de estas regiones ha sido perturbada por el narcotráfico. Los cultivos de hoja de coca también han favorecido las corrientes migratorias desde diferentes partes del país hacia el sudeste, en la región conocida como los Territorios Nacionales o la Orinoquía-Amazonía, que desde antes de la llegada del narcotráfico se ha caracterizado por tener precarias vías de acceso al interior del país, una incipiente agricultura comercial que coexiste con una ganadería extensiva, una dinámica colonización de la frontera agrícola, selva tropical y comunidades indígenas.

Con las estimaciones de las utilidades del tráfico de cocaína se podría obtener una aproximación a su dimensión económica en el hemisferio y una provocación para los análisis de economía política.

En la región andina y México, la participación de los ingresos de la droga puede llegar al 1% del PIB, claro está que en su interior existen disparidades; en Bolivia la economía de la droga tiene un 7% del PIB, mientras que en Perú y México están por debajo del 0.5%; una importancia relativa muy parecida a la que en Estados Unidos tendría el valor de las ventas de cocaína, el 0.6% del PNB, donde la mayor parte del valor agregado del negocio mundial se genera en el mercado minorista controlado por organizaciones delictivas locales (gráficas 15 y 16).

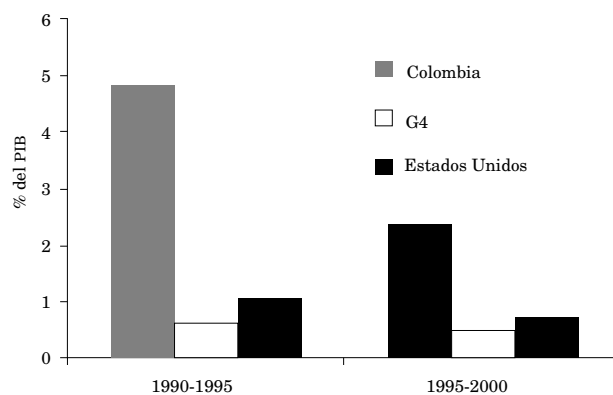
De hecho, el consumo de 301 toneladas de droga en Estados Unidos en 1998, no sólo permitió ventas por 39 mil millones de dólares, sino también, y siguiendo los datos Levitt y Venkatesh (1998), evidenció que el mercado minorista puede ser una fuente importante de empleo.⁸ Para la fase agroindustrial realizada en Colombia, se estima la generación de aproximadamente 70 mil empleos directos, pero se desconoce cuánto empleo vincula en las demás etapas del negocio.

Para abordar las perspectivas inmediatas, de nuevo nos remitimos a los escenarios de la sección anterior (gráfica 3).

- Sin mediar el PC, no sería esperable que el funcionamiento global de la economía se vea adversamente afectado por la reducción paulatina de los ingresos de la droga, ni tampoco otros sectores y regiones, aunque prevalecerían los costos generados por la inestabilidad sociopolítica en los procesos de ahorro-inversión.
- El escenario de una reducción del 50% en el área cultivada, prevista por el Plan Colombia, implicaría una reducción de las utilidades repatriables a 900 millones de dólares, es decir, a un 0.6% del PIB, siendo directamente afectadas las regiones cultivadoras (35 mil empleos menos) y algunas actividades pertenecientes a la informalidad. Ello sobre la premisa de una paz negociada, pues de lo contrario sería de esperarse que la delincuencia organizada y los grupos alzados en armas, ante la perspectiva de una reducción de ingresos, aceleren la promoción de cultivos, su vinculación a la fase exportadora y ofrezcan resistencia por caminos diferentes a la negociación pacífica, lo que ocasionaría por consiguiente un mayor deterioro de la estabilidad sociopolítica y el clima de los negocios.

8 De acuerdo con este trabajo, una organización pandillera representativa del bajo mundo en Estados Unidos (un consumo de 300 toneladas anuales) puede llegar a vender anualmente entre 2 y 10 kilos en el mercado detallista —tomando dos rangos de tamaño— que pueden tener entre 30 y 60 integrantes.

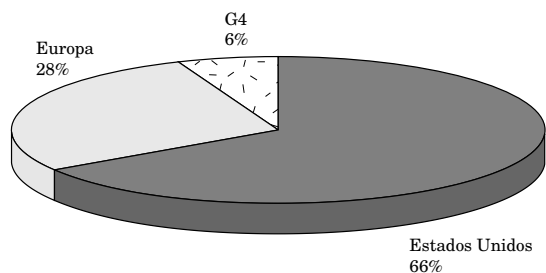
GRÁFICA 15
IMPORTANCIA RELATIVA DE LA ECONOMÍA DE LA COCAÍNA



G4 comprende Bolivia, Perú, México y Colombia.

FUENTE: Rocha (2000), Banco Mundial, cálculos del autor.

GRÁFICA 16
APROPIACIÓN DEL MERCADO DE LA COCAÍNA



FUENTE: Rocha (2000), ONDCP, UNDCP y cálculos del autor.

REPERCUSIONES SOCIOPOLÍTICAS

La literatura económica ha explorado las relaciones del narcotráfico con la institucionalidad y la estabilidad sociopolítica, principalmente a través de la explicación del desplazamiento, la corrupción, la violencia y la criminalidad, los vínculos con los grupos alzados en armas y la transformación de las instituciones; estos trabajos hacen énfasis en los costos que representa el narcotráfico para el bienestar, y las posibilidades de crecimiento de la economía.

El impacto del narcotráfico sobre la sociedad colombiana ha sido grande y complejo. La acumulación de riqueza determinó un crecimiento de la economía informal y un deterioro de las instituciones tradicionales —por medio de la creciente corrupción y violencia— en lo que se denominó el *efecto catalítico*, que aceleró un proceso de deslegitimación del Estado, que había comenzado desde antes de la llegada del narcotráfico, y que propició la inestabilidad sociopolítica (Thoumi, 1994).

La irrupción del narcotráfico trajo consigo la financiación de las bandas de sicarios, los grupos paramilitares y la guerrilla, la sustitución de parte de la clase empresarial del sector agropecuario, la intimidación del poder judicial, el desprecio por el sistema legal para la solución pacífica de conflictos, incrementos en las tasas de criminalidad, secuestro y violencia como mecanismos de justicia dentro de la industria, el terrorismo para imponer un santuario legal, los desplazamientos de población en las zonas rurales, la contrarreforma agraria desatada por las compras de propiedades rurales, el tráfico de armas y la presencia de mercenarios extranjeros.

También se argumenta que el narcotráfico, al contribuir a la financiación del contrabando y la creciente informalización de la economía, erosionó la institucionalidad de los controles administrativos de la economía cerrada, facilitando el consenso frente a la adopción de las reformas del programa de apertura económica (Molina, 1995).

Los estudios que analizan las negativas repercusiones entre la actividad criminal y el crecimiento económico y las tasas de productividad e inversión, revelan, por una parte, que en el nivel internacional las tasas de homicidio son explicadas positivamente por la producción de narcóticos (Fajnzylber y otros, 1999), al igual que una coincidencia entre la incursión de Colombia en el narcotráfico y el repunte en la violencia (Rubio, 1995).

Para las siete mayores ciudades y sus áreas metropolitanas se encontró una estrecha asociación entre los ingresos por narcotráfico y los niveles de criminalidad: un incremento del 1% en los ingresos del narcotráfico eleva la tasa de homicidios en 0.2%. Una muestra realizada en 700 municipios dio como resultado que el 90% de la diferencia entre municipios con mayor violencia y el resto, corresponde a la presencia de paramilitares, guerrilla y narcotráfico (Sánchez y Núñez, 2000).

También ha sido evidente la influencia negativa del narcotráfico y el terrorismo asociado con la eficiencia en la administración de justicia: “La violencia tiene mucho más que ver con el narcotráfico y con el desplome del sistema de justicia en el país que con explicaciones tradicionales que han sido repetidas

desde cuando no había narcotráfico.” (Montenegro y otros, 1999; Echeverry y Partow, 1998).

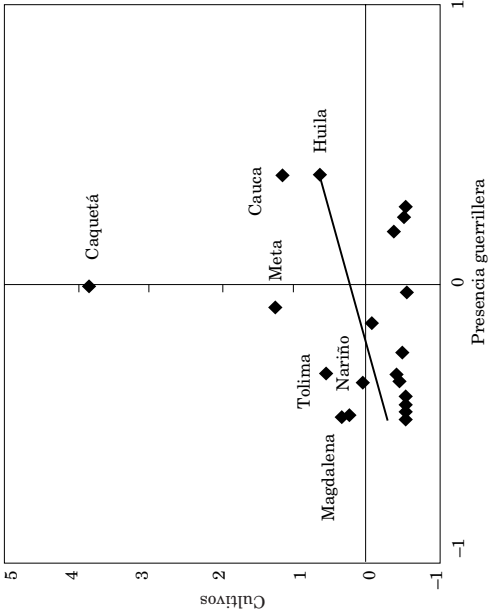
Es así que en Colombia la escalada de violencia ha coincidido con la incursión de colombianos en el narcotráfico, y los delitos relacionados con el narcotráfico han estado estrechamente ligados con las tasas de homicidios (Rocha, 2000). En las ciudades, el accionar de los cuerpos de seguridad del narcotráfico para proteger propiedades, garantizar contratos delictivos, intimidar y corromper a las autoridades, explican esta conexión. Mientras que en el sector rural, dos han sido las conexiones del narcotráfico que explican el mecanismo de transmisión hacia la inestabilidad sociopolítica: el control de los cultivos y el de las inversiones en propiedades rurales. Los narcotraficantes armaron ejércitos privados para controlar algunas de las zonas de cultivos y proteger sus inversiones de la extorsión de la guerrilla y de la delincuencia común; en consecuencia, compraron tierras e impusieron su presencia mediante intimidación y/o simpatía de los propietarios tradicionales y de la población local. Mientras que las guerrillas y los grupos paramilitares, a pesar de sus diferencias ideológicas, encontraron una fuente común de ingresos en los tributos al acopio de las cosechas y su exportación.

Para las guerrillas de las FARC y del ELN la probabilidad de hacerse presentes en un municipio aumenta 155% si existen cultivos ilícitos (Vélez, 2000). Durante el periodo 1991-1994 se estimaba que 40% de los ingresos de los grupos guerrilleros se obtenía del narcotráfico y que su accionar violento le representaba al país costos equivalentes al 4% anual del PIB (Granada y Rojas, 1995).

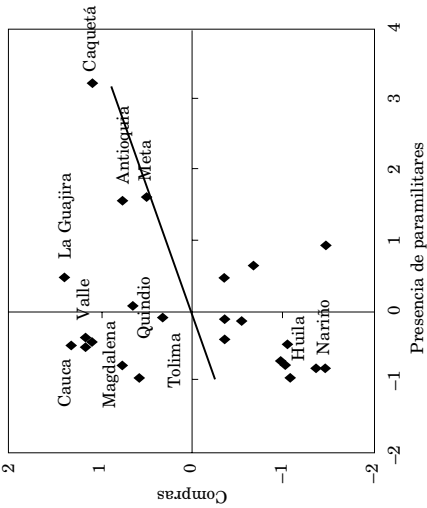
La estructura de la propiedad agrícola ha favorecido la marcada preferencia de los narcotraficantes por inversiones en propiedades rurales. En regiones como Antioquia, Caquetá, Meta y La Guajira, donde la intensidad de las compras de tierras ha sido particularmente elevada, la presencia de grupos paramilitares, que masacran a la población civil, ha sido particularmente alta. Al parecer, con mayor intensidad que la guerrilla, los grupos paramilitares usan preferentemente el terror indiscriminado sobre la población civil (gráfica 17). Mientras que en el Valle y el Tolima, pese a la importancia de las inversiones rurales, la presencia de los ejércitos particulares ha sido relativamente baja.

Lo anterior ha determinado un tremendo reto a las instituciones tradicionales y la necesidad de distraer en forma creciente recursos necesarios para financiar el desarrollo económico y el bienestar de la población en favor del gasto en administración de justicia y seguridad. Mientras que en los años se-

GRÁFICA 17
CULTIVOS ILÍCITOS Y PRESENCIA GUERRILLERA
(valores estandarizados)



COMPRAS DE TIERRAS Y PARAMILITARES
(valores estandarizados)



FUENTE: Rocha (2000).

tenta se destinaba a estas finalidades 2.5% del PIB en promedio, este gasto ha crecido paulatinamente hasta promediar 4.5% del PIB en la segunda mitad de los años noventa del siglo pasado (Rocha, 2000).

De la revisión de los canales señalados por los trabajos elaborados hasta el momento sobre los nexos entre la economía colombiana y el narcotráfico, se desprende que la sabiduría convencional ha sobrestimado la repatriación de utilidades y sus bondades económicas, mientras que ha subestimado los costos derivados por la inestabilidad sociopolítica. La ilegalidad del narcotráfico ha determinado que mucha de la información sea precaria y que pululen los mitos; los estudios económicos realizados sobre el tema, cada vez más comprensivos y con mejor información, sin llegar a ser conclusivos, coinciden en mostrar costos que superan los eventuales beneficios, y permiten concluir que la inserción de Colombia al narcotráfico le ha representado una limitación a sus posibilidades de bienestar y crecimiento económico.

Pero las repercusiones económicas y sociales también se dan en los países consumidores. En Estados Unidos el tráfico de drogas está directamente relacionado con las tasas de criminalidad. Utilizando información sobre 27 áreas metropolitanas, Grogger y Willis (2000) muestran que de no haberse dado la introducción del *crack* (un derivado de la cocaína), probablemente la tasa récord en criminalidad urbana de 1991 pudo haber sido menor en 10 por ciento.

Dada la ilegalidad del tráfico de drogas, los derechos de propiedad sobre las redes de distribución se ejercen mediante la intimidación. De hecho, las finanzas de las pandillas, pertenecientes al crimen organizado en las ciudades de Estados Unidos, son resultado de la efectividad de la violencia para controlar territorialmente sus redes de distribución (Levitt y Venkatesh, 1998).

Aunque para Colombia aún no se conocen estudios equivalentes, es bien sabido que las fases de acopio, exportación, distribución al mercado mayorista y lavado de activos, son intensivas en violencia, con el fin de minimizar los riesgos de incumplimiento contractual y de la interdicción policial.

Las reflexiones que surgen al final de este apartado, sobre el futuro inmediato de la conexión entre el narcotráfico y la inestabilidad sociopolítica, también retoman los escenarios dibujados precedentemente.

- Sin PC y de continuar las tendencias recientes en el mercado y la industria, la paulatina reducción de las utilidades iría acompañada con una reducción en las tasas de criminalidad; sin embargo, ello no tendría necesariamente que reflejarse —como de hecho está ocurriendo— en otras formas de inestabilidad sociopolítica, por la endogeneidad del conflicto armado al narcotráfico.

- La perspectiva de una paz negociada y la reducción del área cultivada previstas por el Plan Colombia, debería acelerar el recorrido hacia la estabilidad sociopolítica, a lo cual debería contribuir la credibilidad en el cumplimiento de objetivos y la integralidad de las diferentes estrategias del PC; si los agentes no le otorgan credibilidad a las políticas de interdicción y de desarrollo alternativo, serían previsibles las adversas repercusiones de la pugna redistributiva (marchas campesinas y paros cívicos) sobre la estabilidad sociopolítica; y si el PC excluyera del acuerdo de paz a las protestas campesinas, se sumaría la escalada en el conflicto armado y la controversia internacional.

UNA MIRADA A LAS POLÍTICAS

En este apartado, el punto de partida es una reseña de los costos que la inserción al narcotráfico le ha representado a Colombia, para recrear el conocimiento que asistió al diseño del Plan Colombia y una apretada sinopsis de sus estrategias (excluyendo interdicción y paz), sin dejar de reconocer que algunos de los problemas económicos y sociales, recientemente asociados al narcotráfico, sólo fueron exacerbados por su aparición.

Pese a lo prematuro de una evaluación del PC, la endogeneidad del narcotráfico y del conflicto armado anticipan que si este último se escala y se prolonga reducirá la cobertura de las diferentes estrategias del PC, y aumentará las necesidades de financiación, para lo cual se hace una rápida reflexión sobre los programas de atención a la población vulnerable y al programa de desarrollo alternativo.

De acuerdo con los apartados anteriores, los cambios en el mercado internacional de la cocaína y en la estructura local han determinado una tendencia decreciente en la repatriación de utilidades que ha representado en promedio 3% del PIB,⁹ sin externalidades positivas, pero en cambio, con evidentes costos frente a una economía sin narcotráfico: mayor inestabilidad sociopolítica, menor bienestar, distorsiones en la asignación de recursos públicos y en los procesos de ahorro e inversión.

Sin embargo, durante mucho tiempo la percepción predominante en la sabiduría convencional era diametralmente opuesta: un mercado internacional en expansión, beneficios económicos y ambiguas repercusiones sociopolíticas. Un problema de acción colectiva, que en el pasado restringió el diagnóstico y la legitimidad de las políticas antinarcóticos.

9 La contribución al PIB de la repatriación y de la fase agroindustrial (3% del PIB) también se pueden considerar como una aproximación al desplazamiento de la economía formal.

Una muestra de lo anterior es que hasta el momento no se dispone de una estimación de los costos asociados al narcotráfico que incorpore los diferentes efectos de una manera comprensiva. Pero aceptando que el narcotráfico ha sido el catalizador de la inestabilidad sociopolítica, en el sentido de Thoumi (1994), es posible apreciar algunas de las magnitudes, estimadas con diferentes metodologías y propósitos, de los efectos que se le pueden atribuir al narcotráfico sobre el proceso de ahorro-inversión, la pérdida de capital humano, el desplazamiento de la economía legal y el deterioro sobre el medio ambiente (cuadro 2).

Así, la inversión privada podría ser superior en 4% del PIB si se tuviera un contexto de estabilidad sociopolítica (Parra, 1998). Pero por el lado del financiamiento, también el dinero del narcotráfico ha tenido consecuencias adversas al reducir las fuentes internas: por el exceso de gasto fiscal en seguridad y justicia, la evasión fiscal y la fuga de capitales. No se conocen los sobre costos de la inversión por el conflicto, tal como lo evidencia el escalafón de las firmas calificadoras internacionales. Tampoco se sabe del costo de las inversiones necesarias para sustituir las divisas generadas por las exportaciones ilegales.

Las pérdidas humanas y materiales derivadas del conflicto armado con la guerrilla y los grupos paramilitares (minas antipersonales, desplazamiento, combates, secuestros, asesinatos, extorsión) han sido estimadas en 0.7% del PIB (Castro y otros, 1999a). Se desconocen los costos de la destrucción de poblaciones, la deserción escolar, el éxodo de nacionales, la rehabilitación de la salud física y mental de las víctimas del conflicto, entre otros aspectos. Tampoco se sabe del impacto del narcotráfico y los cambios en la institucionalidad sobre los costos de transacción.

El daño ambiental corresponde a la destrucción de aproximadamente 2.3 millones de hectáreas en selva húmeda y bosques tropicales afectados por la siembra y fumigación de los cultivos de hoja de coca y amapola. No se sabe cuál sea su costo, como tampoco el ocasionado por el vertimiento en ríos de los desechos químicos del procesamiento y los daños sobre la salud por la utilización de agroquímicos de contrabando.

Hasta 1998, la estrategia del Estado frente al narcotráfico había consistido en la erradicación de cultivos —con fumigación y el programa de desarrollo alternativo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (Plante)—, confiscación de insumos y exportaciones, destrucción de laboratorios, captura y desarticulación de organizaciones exportadoras, homologación de la legislación internacional contra el narcotráfico y los delitos conexos, leyes de expropiación de la riqueza adquirida con utilidades del narcotráfico, una jurisdicción especial para la justicia antinarcóticos y un programa contra la drogadicción. Todo lo

CUADRO 2

<i>Rubros</i>	<i>% del PIB</i>
<i>Ahorro-inversión</i>	
Menor FBlK privada (Parra, 1998)	4.0
Menor financiación:	
Fuga de capitales (Utilidades-FCE)	1.2
Gasto público en seguridad y justicia	2.0
Evación fiscal (FCE*.3)	0.8
Infraestructura (Castro y otros, 1999a)	0.1
<i>Pérdidas en capital humano</i> (Castro y otros, 1999a)	0.7
Minas antipersonales (Celis, 1999)	0.1
Muertes	0.1
Desplazamiento	0.0
Pago de secuestros	0.5
<i>Desplazamiento de la economía legal</i>	
FCE	2.6
Contrabando (Steiner, 1997)	1.4
Transferencias	1.0
Otros	0.2
Cultivos	0.5
	<i>Miles de ha</i>
<i>Medio ambiente</i> (Castro y otros, 1999a)	2 281
Pérdida de selva húmeda (4:1 ha de coca)	1 619
Pérdida de bosque tropical (2.5:1 ha de amapola)	214
Pérdida por fumigaciones (1.5 por ha)	448

FBlK = Formación Bruta Interna de Capital.

FCE* = Flujos de Capitales Encubiertos.

ha = hectáreas.

FUENTE: Estimaciones de los efectos del narcotráfico en los años noventa del siglo XX.

anterior va de la mano con una escalada en el gasto público dedicado a la seguridad y la justicia.¹⁰

Sin embargo, el hecho de que Colombia llegara a ser el principal proveedor mundial de cocaína, luego de haber erradicado 220 mil hectáreas durante la última década, casi el doble del área cultivada en 1999, y luego de asumir elevados costos económicos y sociales, hicieron necesario el replanteamiento de la estrategia antidrogas, por medio del Plan Colombia, mediante la integración de los esfuerzos de interdicción, los de recuperación económica, fortalecimiento ins-

10 En Colombia se están destinando a la lucha antinarcóticos más de mil millones de dólares anualmente, 1.1% del PIB; el equivalente en Estados Unidos es de 0.2% del PNB (ONDCP, 2000). Desde la incursión de Colombia en el narcotráfico, la participación del gasto público en defensa y justicia subió en el equivalente a 2% del PIB (Rocha, 2000).

titucional, desarrollo institucional, apoyo a la población más vulnerable, y el proceso de paz con los grupos alzados en armas, cuyo diseño y algunos de sus alcances se analizan a continuación.

El diseño del PC

En 1998 se lanzó el Plan Colombia (PC), que conlleva una política que pretende remover algunas de las condiciones que hicieron posible la inserción de la economía en el tráfico de drogas y mitigar las repercusiones adversas que ha tenido sobre el crecimiento, bienestar y la institucionalidad de la economía.¹¹ Una propuesta que tiene a su favor la integralidad de su diseño, con las limitaciones inherentes a la disponibilidad de recursos, la eficacia de su implementación y el carácter estructural de algunas condiciones que favorecieron el narcotráfico.

En 1999, el PIB había caído 4.3%, el desempleo se incrementó 20% y el déficit fiscal cerró en 5.2%. Ese año, el sistema de flotación intervenida en el interior de una banda cambiaria, resultó insostenible por las presiones sobre la tasa de interés y sus repercusiones recesivas. Todo ello en medio de una violenta escalada en la confrontación armada, el desplazamiento de la población civil, cifra récord en las áreas cosechadas y fumigadas de coca.

El PC tiene un presupuesto de 7 500 millones de dólares para ejecutar durante cuatro años, a partir de 2000, el equivalente de 2.1% del PIB anualmente. La estrategia de la lucha antinarcóticos recibirá 4 324 millones de dólares, de los cuales 3 090 millones corresponden a recursos ya existentes (RYE) del presupuesto nacional destinados a seguridad y administración de justicia;¹² y 1 234 millones adicionales para la lucha contra el narcotráfico.

El resto, 3 176 millones de dólares, administrado por medio del Fondo de Inversiones para Paz (FIP), se destinará a dos grandes estrategias. La prime-

11 El diseño del PC hace explícita la implementación de siete líneas de acción gubernamental: 1) una línea macro de control a la evasión fiscal, acceso a los mercados internacionales y mejoramiento en el riesgo de inversión; 2) de acuerdos de paz negociados con los grupos alzados en armas; 3) para la defensa nacional, judicial y de derechos humanos, ampliando la cobertura y eficiencia de las funciones del Estado; 4) de desarrollo alternativo, para fomentar la legalización sostenible de la economía campesina, la protección del medio ambiente, la inversión en capital social; 5) de participación social, para ampliar el apoyo popular al PC, en las diferentes instancias de gobierno, la comunidad empresarial y dentro de las distintas expresiones de la sociedad civil; 6) de desarrollo humano, de apoyo a los sectores de la población más vulnerables a la pobreza y la violencia; y 7) de orientación internacional, que promueva la corresponsabilidad política entre países productores y consumidores.

12 Recursos ordinarios existentes apropiados en el Instituto Nacional Penitenciario Colombiano (Inpec), sector justicia, fiscalía, ministerio del interior (orden público), defensa y policía para funcionamiento e inversión.

ra, la recuperación económica y social (RES), destinará 900 millones para la red de apoyo social (RAS) —programas de generación de empleo— y 64 millones de dólares para la promoción de las exportaciones y la lucha contra el contrabando mediante el mejoramiento de la gestión aduanera. La segunda, la estrategia de fortalecimiento institucional y desarrollo social (FIDS), recibirá 2 157 millones de dólares, de los cuales 576 millones corresponden al componente de atención humanitaria (ah), atención a la población afectada por el conflicto, y el resto al componente de desarrollo alternativo integral (DA) (cuadro 3).

CUADRO 3
PRESUPUESTO DEL PLAN COLOMBIA

<i>Estrategias</i>	<i>Total</i>
<i>I. Recuperación económica y social</i>	964
• Promoción exportaciones y de la gestión aduanera	64
• Red de Apoyo Social ¹	900
<i>II. Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social</i>	2 157
• Atención humanitaria	576
Atención a la población desplazada	499
Atención a poblaciones vulnerables	73
Promoción y difusión de DDHH y DIH	4
• Desarrollo Alternativo Integral	1 321
Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social	144
Procesos productivos	471
Sostenibilidad ambiental	257
Infraestructura	450
• Recursos por distribuir en otros proyectos	260
<i>III. Proceso de paz</i>	54
<i>IV. Lucha contra el narcotráfico</i>	1 234
<i>V. Recursos ya existentes</i>	3 090
<i>Total</i>	7 500

¹ Incluye 218 millones de dólares adicionales.

DDHH = Derechos Humanos.

DIH = Derecho Internacional Humanitario.

FUENTE: <www.dnp.gov.co>.

Dado el estrecho margen que imponía la coyuntura macroeconómica para el déficit fiscal, la financiación del PC necesitaba la consecución de recursos adicionales al presupuesto del gobierno colombiano, como son 600 millones de dólares en bonos de suscripción forzosa para el sector privado y recursos de cooperación internacional¹³ por 2 781 millones de dólares, es decir, 45% del PC.

¹³ En las Mesas de Aportantes de Madrid y Bogotá, coordinadas por el BID, se obtuvo financiamiento por 800 millones de dólares, de los cuales 550 millones corresponden a créditos del Banco

La estrategia de recuperación económica y social (RES) se propone una reestructuración de las finanzas públicas,¹⁴ la implementación de la Red de Apoyo Social (RAS) y lograr la prórroga y ampliación de las preferencias arancelarias a las exportaciones hacia Europa y Estados Unidos.

Los programas de la RAS se proponen mitigar el impacto de la recesión económica sobre la población más vulnerable (cuadro 4), con subsidios alimenticios y escolares en 500 municipios (300 mil familias y 373 mil niños menores de 7 años y 670 mil jóvenes entre 7 y 17 años). El programa Manos a la obra-Vías para la Paz —que es un subsidio para la realización de obras públicas que incorporan al trabajo a la población pobre— espera generar más de 300 mil empleos en cuatro principales ciudades y 70 municipios circunvecinos. Los subsidios a jóvenes desempleados por medio de becas de formación en el sitio de trabajo,¹⁵ en las cuatro principales ciudades, espera capacitar 100 mil jóvenes.¹⁶

CUADRO 4
PRESUPUESTO DE LA RED DE APOYO SOCIAL*

<i>Red de Apoyo Social</i>	<i>Crédito</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Total</i>
Manos a la obra-Proyectos Comunitarios	200	95	295
Manos a la obra-Vías para la Paz	162	44.5	206.5
Subsidios condicionados	230	106	336
Capacitación a jóvenes desempleados	70		70
Gastos de administración	20		20
Total recursos	682	245.5	927.5

* En DNP (2000b) la RAS totaliza 900 millones de dólares.

FUENTE: DNP.

Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, Japón e Italia; de Estados Unidos, 1 158 millones. Colombia, al igual que Perú, recurrió a Mesas de Donantes en Bruselas (noviembre de 1998) y París (enero de 2000), y Bolivia en Washington (noviembre de 1999).

14 La estrategia de recuperación macroeconómica comprende reformas en el régimen de pensiones de las entidades territoriales (Ley 549 de 1999), la reestructuración financiera y tributaria de empresas en dificultades mediante la Ley de Intervención Económica (Ley 550 de 1999), estímulos a la construcción de vivienda (Ley 546 de 1999), la reciente reforma tributaria y otras iniciativas legislativas que están en trámite en el Congreso, como las reformas a las finanzas territoriales y al régimen de pensiones.

15 Tiene un financiamiento de 70 millones de dólares provenientes de un crédito externo contratado con el BID.

16 En sentido estricto, la RAS corresponde a un programa de aseguramiento de ingresos para la población más vulnerable a las perturbaciones macroeconómicas, mediante el cual el PC aspira crear 650 mil empleos durante los tres años de su vigencia, lo cual debería reflejarse en una menor

Con la cooperación económica internacional, el PC también busca facilitar la inserción de la economía legal a las corrientes del comercio y la inversión internacional: la prórroga del Acuerdo de Preferencias Comerciales de Estados Unidos para los Países Andinos (ATPA) y el Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea (SGP) para los Países Andinos, la obtención de preferencias para confitería, textiles, confecciones, industria editorial, calzado, cemento y manufacturas de cuero; la ampliación de la lista de productos e inclusión de sectores con potencial exportador, tales como piedras preciosas y azúcar, así como el levantamiento de barreras no arancelarias.

15% de las exportaciones colombianas —aproximadamente 1 900 millones de dólares— se beneficia de las preferencias arancelarias derivadas del ATPA y el SGP. La introducción del sistema de preferencias SPG/Régimen Andino permitió que 59% del valor exportado a la Unión Europea se realizara con un margen de preferencia del 100% del arancel. En 1996 se exportaron a la Unión Europea productos por 2 400 millones de dólares, por lo se estimaba una actividad económica que generara cerca de 5.5 millones de empleos (Cubillos, 1997). En el año 2000 las exportaciones cayeron a 1 725 millones de dólares debido a la adversa dinámica del mercado cafetalero y las cuotas al banano.

En lo que respecta a las exportaciones hacia Estados Unidos, el sistema de preferencias arancelarias concedidas de 1991 a 2001 a los países de la región andina, ATPA, beneficia 15% de las exportaciones colombianas con este destino (Mesa, 1997). Entre 1997 y 2000, las exportaciones hacia Estados Unidos pasaron de 4 724 millones de dólares a cerca de 5 800 millones. El gobierno colombiano está adelantando gestiones para lograr la prórroga y ampliación de su cobertura.

La estrategia de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social (FIDS) tiene dos componentes: atención humanitaria y desarrollo alternativo. El primero busca promover el respeto a los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario, así como la atención a la población afectada por la violencia, por desplazamiento, minas antipersonales y el consumo de drogas.

El Programa de Atención a la Población Desplazada dispone de 499 millones de dólares. Se propone atender 715 mil desplazados a través de la Red Nacional de Asistencia Humanitaria, focalizada en 139 municipios —donde se

oferta de trabajo y una menor tasa de desempleo. Si a enero de 2001 la tasa de desempleo se situó en 20.5% (3.2 millones de desempleados), la RAS en operación la habría reducido a un 16.5 por ciento.

concentra 85% de la expulsión y recepción de desplazados—, mediante Campamentos Móviles, Centros de Acomodación Temporal y Unidades de Atención y Orientación. Se propone también reubicar a 290 mil desplazados mediante el Programa de Relocalización, Estabilización y Retorno,¹⁷ que comprende subsidios a la adecuación, compra y arrendamiento de tierras y casas, transporte y aseguramiento alimentario y proyectos productivos, crédito de alta rotación (3-6 meses) para pequeños usuarios (máximo 500 dólares) con el que se desea atender a 140 mil desplazados.

El programa de atención a poblaciones vulnerables al conflicto, como los niños y las mujeres, también hace parte del componente de atención humanitaria. Se estima que 6 mil niños están enrolados en los grupos de extrema ideología y un número no establecido trabaja en los cultivos ilícitos; 49% de la población desplazada es menor de edad y 31% de los hogares tienen de jefe de hogar a una mujer —Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos (Codhes), 1999. Con 10 millones de dólares, canalizados a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el PC ofrecerá internados para 5 400 niños, asistencia alimentaria a 24 750 niños de 165 municipios ubicados en zonas de conflicto, la creación de 7 425 asociaciones juveniles para promover procesos productivos, asistencia a 1 500 niños desmovilizados de los grupos alzados en armas, asistencia a 3 mil niños dedicados a la prostitución, asistencia sociológica a 172 800 personas afectadas por la violencia.

El PC tiene previsto destinar 15 millones de dólares a la rehabilitación médica y social de la población afectada por minas antipersonales (MAP). Se estima que en Colombia hay cerca de 70 mil minas sembradas en un área de 185 mil km², un territorio mayor al afectado en Centroamérica. Son 105 los municipios donde se han causado muertes y heridas a 7 700 personas, entre ellas 5 250 niños. Una proyección para los próximos 10 años calculaba los costos anuales de las MAP en 109 millones de dólares, representados en pérdida de capital humano, atención médica e inactividad económica de las regiones; la sola remoción de las MAP podría costar 57 millones de dólares (Celis, 1999).

El componente de desarrollo alternativo integral (DA), con 1 321 millones de dólares, promueve procesos productivos generadores de empleo que sean sostenibles económica y ambientalmente —en concertación con las comunidades locales—, que brinden alternativas de ingreso frente a los cultivos ilícitos, además de la promoción del fortalecimiento institucional y de las organizaciones

17 En concordancia con la Ley 387 de 1997.

sociales locales y regionales, así como en la preservación y recuperación de zonas ambientalmente frágiles y el desarrollo de inversiones en infraestructura física y social, dirigidas a articular los proyectos productivos a los mercados.¹⁸

El DA se focalizará inicialmente en municipios agrupados en tres regiones¹⁹ del país: el Macizo Colombiano (MC), el Magdalena Medio (MM), y el Suroriente (SO), las cuales han sido afectadas por fenómenos de violencia, por la presencia de grupos armados, por los cultivos ilícitos, por la existencia de ecosistemas ambientalmente frágiles, por la precaria presencia del Estado, por los altos niveles de pobreza²⁰ y por una deficiente oferta de servicios básicos. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), allí se encuentra 85% del área de parques nacionales naturales, 28% de la población indígena, 87% de la producción total de amapola y 85% de hoja de coca, 60% de los integrantes de la guerrilla y unas tasas de homicidio y secuestro muy superiores al promedio nacional. El componente DA incluye cuatro programas: Componente de Desarrollo Alternativo de la estrategia de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social (FIDS-DA), Procesos Productivos, Sostenibilidad Ambiental e Infraestructura.

En Componente de Desarrollo Alternativo de la estrategia de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social (FIDS-DA) destinará 144 millones de dólares a la financiación de actividades de fortalecimiento institucional de regiones de conflicto, a programas de eficiencia en la gestión pública local y regional, a la titulación de tierras, manejo de tierras en zonas de conflicto, mejoramiento de la educación rural, a la promoción de la convivencia pacífica y la cultura de la paz. Se espera proteger la cultura de 221 mil habitantes indígenas del MC, mejorar la gestión pública de las tres regiones, la regularización de los derechos de propiedad para 59 mil ocupantes de tierras y 35 mil de predios urbanos abandonados y hacer extensiva la experiencia de la primera fase del Programa de Desarrollo y Paz del MM para el MC y el SO, entre otros.

18 El DA ha recogido la experiencia y conocimiento regional de instituciones como el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (Plante), el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, el Fondo de Desarrollo Rural Integrado (DRI), la Unidad Municipal de Asesoría Técnica Agropecuaria (UMATA), la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), entre otras, así como diversas asociaciones campesinas y empresas privadas.

19 El Macizo Colombiano, suroccidente del Tolima y del Huila, oriente del Cauca y nororiente de Nariño. El Magdalena Medio, suroriente de Antioquia, Sur de Bolívar y Suroriente de Santander. El Suroriente, Caquetá, Putumayo, Meta y Guaviare.

20 Es un común denominador con las cuencas cocaleras de Perú y Bolivia (Cabieses, 2000).

CUADRO 5
REGIONES PARA DA
(indicadores seleccionados)

Regiones	Total	% Rural	NBI % (1)	ICV % (2)	Analfabetismo %
Magdalena Medio	855 040	54.6%	61	47	17
Suroriente	1 285 624	49.4%	60	64	11
Macizo Colombiano	1 494 626	53.5%	57	59	13
Total nacional	37 664 711	69.0%	31	71	9

(1) Población con necesidades básicas insatisfechas (NBI).

(2) Población por encima del índice de calidad de vida (ICV).

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), 1993-Sistema de Indicadores Socio-Demográficos del Departamento Nacional de Planeación (SISD-DNP), 1999.

En Procesos Productivos de DA²¹ se invertirán 471 millones de dólares —si se incluyen inversiones después del tercer año serían 545 millones (DNP, 2000a)—, con los que se espera generar 40 056 empleos anuales en agricultura tropical —intensiva en mano de obra— y ganadería, en extensiones dedicadas a pastos, papa, frutales, palma de aceite, yuca, frijol, cacao, café orgánico y espárrago (cuadro 6). Estas inversiones tienen a su favor el desarrollo de actividades en la agricultura regional (Castro y otros, 1999b) y en su mayoría haber tenido un satisfactorio desempeño durante la década (Jaramillo, 1998).

También dentro del DA se financiarán 257 millones de dólares en proyectos de fortalecimiento y sostenibilidad ambiental, a través de la restauración y establecimiento de bosques; sistemas forestales productivos; ordenamiento y recuperación de ciénagas; uso sostenible de los recursos; conservación y manejo de áreas protegidas. Con los cuales se aspira a generar 5 370 empleos y la producción forestal de 84 mil hectáreas.

El PC también dotará a los productores de subsidios a la demanda de crédito para inversión, mediante el incentivo a la capitalización rural (ICR) y el certificado de incentivo forestal (CIF), así como la utilización del seguro agropecuario para cultivos y el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) para facilitar el acceso al crédito. Adicionalmente, se sabe que el gobierno se encuentra dise-

21 Los proyectos productivos se originan bajo diferentes iniciativas y esquemas de participación: proyectos diseñados y promovidos por las comunidades, el sector privado, el Estado y ONG. Planes Regionales de Desarrollo para cuatro subregiones para su focalización: Caguán (departamento del Caquetá), Ariari y la Macarena (departamento del Meta), el departamento del Putumayo y el Macizo Colombiano. Programas Regionales de Desarrollo y Paz como una propuesta de convivencia y desarrollo de la sociedad civil.

CUADRO 6
PROGRAMAS AGROPECUARIOS DE DA DEL PC
(extensiones, empleo e inversiones previstas)

	Área			Empleo			Inversiones (miles de dólares)					
	Total	SO	MC	MM	Total	SO	MC	MM	Total	SO	MC	MM
Acuicultura	200	200			695	695			11 021	11 021		
Agropec forestal	10 000	10 000			5 742	5 742			23 286	23 286		
Yuca	4 000	4 000			875	875			10 782	10 782		
Caucho	5 226	5 226			7 149	7 149			62 080	62 080		
Plátano	10 000	10 000			2 303	2 303			5 271	5 271		
Ganadería	225 000	225 000			4 101	4 101			30 831	30 831		
Bosque no maderero	—	—			—	—			15 000	15 000		
Ecoturismo	—	—			—	—			45	45		
Palma de aceite	33 000	4 000	4 000	25 000	6 070	670	800	4 600	268 740	14 675	28 340	225 725
Cacao	11 000			11 000	6 400			6 400	89 080			89 080
Frijol	800			800	2 400			2 400	5 242			5 242
Café orgánico	6 000		6 000		1 200		1 200		890		890	
Espárrago	200		200		2 000		2 000		17 647		17 647	
Frutales	540		540		1 080		1 080		838		838	
Papa	650		650		370		370		4 743		4 743	
Total	306 616	258 426	11 390	36 800	40 385	21 535	5 450	13 400	545 496	172 991	52 458	320 047

FUENTE: *Plan Colombia / Reporte al grupo de apoyo para el proceso de paz*, vol. 2, Presidencia de la República y Departamento Nacional de Planeación (DNP), julio.

ñando mecanismos de financiación de largo plazo para cultivos que requieren mayor tiempo para alcanzar su etapa productiva.²²

Los proyectos de infraestructura del PC por 450 millones de dólares comprenden programas y proyectos de inversión en los sectores de transporte, energía, telecomunicaciones y agua potable y saneamiento básico. Los criterios de asignación del PC comprenden el número de beneficiarios, el nivel de pobreza, el costo de la alternativa energética, el posible fomento a proyectos de desarrollo agrario y el interés de la comunidad, así como la factibilidad de interconexión, el costo por kilómetro, el impacto ambiental, y la sostenibilidad de los proyectos en el mantenimiento y operación en el largo plazo.

Los proyectos de transporte incluyen mejoramiento de carreteras primarias (652 km), secundarias (881 km) y terciarias (666 km), así como obras fluviales que en su conjunto están directamente relacionadas con el desarrollo productivo de las regiones. Los proyectos de electrificación buscan incorporar un número importante de municipios al sistema nacional de interconexión. En telecomunicaciones, el Plan busca dotar de 880 puntos de servicio. Los programas de infraestructura en agua y saneamiento pretenden beneficiar a 1 080 000 personas en 124 cabeceras de municipios menores de 12 mil habitantes.

Las estrategias del PC van encaminadas al fortalecimiento institucional a través del financiamiento y dotación de los instrumentos estatales para la represión del narcotráfico y todos sus delitos conexos, para lo cual durante su vigencia añadirá 1 234 millones de dólares al presupuesto que ordinariamente se destina a la represión del narcotráfico, 1 030 millones de dólares anuales para 2000-2002 (cuadro 3), es decir, un crecimiento del 40%. Las estrategias del PC en la lucha antinarcóticos retoman las líneas de acción seguidas por el país durante la década de 1990, como ha sido la lucha contra la violencia originada en el crimen organizado y sus nexos con el narcotráfico, pero con un énfasis en la interdicción de las diferentes fases de la cadena agroindustrial, mayor control a la utilización de insumos, apoyo a la erradicación voluntaria para los pequeños agricultores y los jornaleros cocaleros, y la erradicación de los cultivos empresariales mediante la fumigación aérea.

Algunos alcances del FIDS

Los alcances de la estrategia de fortalecimiento institucional y desarrollo social (FIDS) se concentran en la atención a la población vulnerable al conflicto y al programa de desarrollo alternativo. Su presupuesto suma 2 157 millones

²² Entre ellos un fondo aval, más incentivos directos a las actividades de tardío rendimiento.

de dólares, equivalentes al 70% del PC diferente a interdicción, y su existencia se encuentra directamente justificada por la magnitud de los cultivos y la dinámica del conflicto armado. Sin embargo, su cobertura se encontrará inversamente asociada al vínculo narcotráfico-conflicto armado; si éste continúa o se profundiza, los propósitos no sólo se harán pequeños ante las necesidades, sino que también se deteriorará su efectividad.

LA AYUDA A LOS DESPLAZADOS

El componente de ayuda a la población afectada por el conflicto se enfrenta a un complejo problema social. Las encuestas revelan que 40% de los desplazados ha abandonado pequeñas propiedades rurales y ha emigrado a centros urbanos. Entre 80 y 90% de la población desplazada se integra por campesinos y propietarios de minifundio. Se estima que 35% se ha establecido en Bogotá. Las condiciones sociales son muy precarias, 40% no percibe ningún ingreso y 50% vive en condiciones de hacinamiento urbano (Codhes, 1999). También la mayoría de los desplazados afirmó que las posibilidades de retorno bajo condiciones de conflicto eran muy remotas, y 57% ya consideraba su asentamiento como permanente. Así, el desplazamiento forzado contribuye a la expansión de los tugurios en la periferia de las ciudades en unas condiciones muy precarias de bienestar (Muggah, 2000). Las estadísticas de desplazados tienen deficiencias (Erazo y otros, 1999). Desde 1996 se han registrado cerca de 528 mil desplazados por la violencia ante la Red de Solidaridad Social; con base en esta información el PC estima que entre 2000 y 2002 se desplazarán aproximadamente 375 mil personas. El Codhes estimó²³ un desplazamiento de 1 millón 418 mil personas para el periodo 1985-1998, 92% del mismo se originó por la violencia de los grupos guerrilleros y paramilitares.

El PC se propone atender a 750 mil desplazados y buscar la relocalización de 290 mil, lo cual plantea un reto a las políticas del gobierno, no sólo en términos de cobertura, sino también por el lado de la asignación de recursos. Desde antes de los años ochenta del siglo XX, Colombia ha registrado intensos movimientos migratorios del campo a la ciudad y hacia las zonas de frontera agrícola, producto de su desarrollo económico y su historia sociopolítica, los cuales se han imbricado con la expansión de los cultivos ilícitos y el conflicto con

23 Corresponde a la suma de los valores estimados anualmente. Estas cifras pueden estar sobrestimadas porque un mismo desplazado puede trashumar por varias localidades y registrarse en varias oportunidades, también puede relocalizarse o retornar a su origen, con lo cual abandona su condición de desplazado. Pero también existe la posibilidad de subestimación, pues los desplazados pueden no querer revelar su nueva localización para proteger sus vidas.

los grupos de extrema ideología, también desde la década de los ochenta del siglo XX. En estas condiciones, la efectividad del programa dependerá de la dinámica del proceso de paz y de los instrumentos para minimizar la desviación de recursos.²⁴

Desarrollo Alternativo Integral (DA)

Respecto al componente de desarrollo alternativo, a continuación se traen a colación la generación de empleo y las experiencias del café en Perú y Bolivia. En términos macroeconómicos, las estimaciones elaboradas con un modelo de equilibrio general computable (Hernández y otros, 2001), las inversiones del PC en el programa desarrollo alternativo durante los cuatro años de su vigencia, generarían un aumento del PIB en 1.2% y la creación de 110 mil nuevos empleos, pero con efectos adversos sobre la inversión privada y la balanza comercial.

Si se consideran los efectos que tendría la reducción de los cultivos ilícitos sobre el empleo y el PIB de las economías regionales, una mirada a las cifras del empleo directo generado por los cultivos ilícitos y los que se crearán con el DA, puede aproximar la magnitud de sus alcances.²⁵

Así, los 46 mil empleos que generaría el PC²⁶ equivaldrían al 67% del empleo demandado por los cultivos ilícitos en 1999; por regiones, sería 50% para el SO y un poco más de la totalidad del MM (cuadro 5 y gráfica 18). Sin embargo, ello se hace bajo el supuesto de que la estimación del empleo se calcula sobre el área cosechada y deja por fuera el área erradicada. En el caso de hoja de coca, en 1999 se reportaron 103 mil hectáreas cosechadas²⁷ (51 mil 500 empleos), pero a la vez se erradicaron 44 mil (22 mil empleos), lo que implica-

24 La experiencia de la tragedia de la destrucción de Armero en 1986, por el deshielo de un volcán, es bien ilustrativa. El número de beneficiarios resultó superior a los muertos ocasionados por la tragedia.

25 Con la salvedad de que no se puede esperar que el PC pueda dar una sustitución de cada empleo ilegal a las actividades legales previstas, pues ello pretendería en muchos casos una relocalización de los productores o profundizar el deterioro de la selva húmeda y bosque tropical. Además, se sabe de trabajadores trashumantes que viajan entre la zona cafetalera y las selvas del Putumayo durante las épocas de cosecha.

26 Para lograrlo el DA-PC realizaría inversiones que equivaldrían a 1.9 veces el valor de la producción anual de los cultivos ilícitos: para el MM sería de 5.6 veces, destinadas al cultivo de palma de aceite, cacao y frijol. Esta disparidad obedece a los requerimientos tecnológicos y periodos de maduración que tienen las diferentes actividades y al proceso de concertación que se dio entre el PC y las comunidades locales, donde también la vocación agrícola, la iniciativa empresarial, la seguridad y la sostenibilidad económica resultaron cruciales.

27 De acuerdo con la nueva metodología satelital del Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos del gobierno de Colombia y la ONU, se reportaron 162 mil hectáreas para 2000 (*Revista Cambio*, semana del 14 al 21 de mayo de 2001).

ría que el potencial de sustitución del PC se reduciría 50%, hecho que tendría mayor relevancia en la región SO.

Además la concentración de los cultivos de amapola en la región del MC y su topografía, implica una logística mucho más complicada en la generación de empleo a través de DA que en las otras dos regiones, por la heterogeneidad de la región andina en términos de vocación agrícola, condiciones de acceso a los mercados, infraestructura e idiosincrasia. Lo anterior plantea, por un lado, la necesidad de inversiones adicionales en DA para las otras dos regiones del sur del país, si se desea lograr una meta de sustitución total de cultivos, y por otro, la urgencia de avanzar en el proceso de paz para acelerar el cronograma de erradicación y de DA.

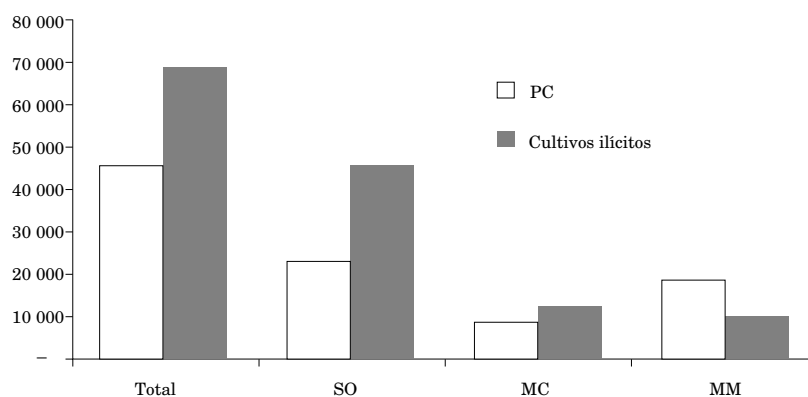
El país ya tuvo una experiencia importante en DA con el programa de diversificación de zonas cafetaleras. Desde la década de 1960, la Federación Nacional de Cafetaleros emprendió un programa de DA para sustituir y complementar los ingresos de la caficultura, con gasto social y en infraestructura. Este programa tenía a su favor el hecho de que se desarrollaba en regiones caracterizadas por tener niveles de ingreso y bienestar por encima del promedio nacional, la institucionalidad creada en torno a la Federación Nacional de Cafetaleros y la baja presencia de grupos de ideología extrema. Pese a lo anterior, una evaluación realizada por la FAO en 1990 señalaba la poca efectividad del programa en el patrón de especialización cafetalera, concentración de crédito y limitantes por dificultades en el mercadeo, desviación de recursos hacia el café, subutilización del potencial de la tierra y de la infraestructura de acopio y de transporte (Leibovich y otros, 1993).

Esta experiencia en DA sugiere un gran reto institucional para la gestión pública, toda vez que las regiones con cultivos ilícitos carecen de todas las ventajas socioeconómicas que tenía la zona cafetalera, pero además sufren de la inestabilidad sociopolítica generada por la presencia de grupos de ideología extrema y las manifestaciones populares contra las fumigaciones.

Las experiencias de Perú y Bolivia en la década de 1990 aún no muestran resultados conclusivos en torno a la efectividad de la sustitución de cultivos ilícitos, ni en la sostenibilidad de los proyectos de DA.²⁸ En Bolivia, al parecer funcionó la política de erradicación compensada y/o forzosa previa al DA, que logró reducir la oferta local para atender el autoconsumo, mientras que en el Perú se dio DA *sin* erradicación forzosa hasta 1996, y la explicación del marchitamiento

28 En el Perú, la caída de los precios durante 1998-1999 ha hecho fracasar proyectos en DA en ajonjolí, barbasco, frutas y café, de una muestra seleccionada (Cabieses, 2000).

GRÁFICA 18
EMPLEO GENERADO POR EL PC Y LOS CULTIVOS ILÍCITOS



FUENTE: DNP, policía y cálculos del autor.

to de su producción la comparten las políticas de interdicción y la sustitución de importaciones de base en Colombia. En el caso del Perú ha resultado evidente la vulnerabilidad de los proyectos a la evolución propia de los mercados (Cabieses, 2000). Tampoco las condiciones sociales de la población cultivadora son parecidas en Colombia con respecto a Perú y Bolivia (Thoumi, 2000). En la mayor parte de las regiones cocaleras predomina una población trashumante propia de las zonas de colonización agrícola, y en menor medida población nativa con sus instituciones tradicionales.

Así el DA se enfrenta a la compleja tarea de poner en práctica alternativas de desarrollo económico para regiones cultivadoras, hasta el momento marginadas del progreso y atribuladas por el conflicto armado; la eventual escalada y prolongación de este último limitaría necesariamente el espectro de acción de aquél.

CONSIDERACIONES FINALES

Desde 1980, los ingresos del narcotráfico repatriables a Colombia habrían oscilado en un 4.4% del PIB, recientemente disminuyeron hasta 2%, de los cuales tres cuartas partes fueron repatriados como transferencias —a través del contrabando abierto de importaciones— y mediante la sobre y subfacturación del comercio; el resto habría financiado la fuga de capitales y estaría aguardando en el sistema financiero internacional.

Esta repatriación no afectó el desempeño macroeconómico ni la composición sectorial, mientras que los cultivos ilícitos y las compras de tierras sí han tenido consecuencias regionales. En cambio, la repatriación sí tuvo visibles y adversas consecuencias sobre la inestabilidad sociopolítica y los procesos de ahorro-inversión, la formación de capital humano, el desplazamiento de la economía legal y el deterioro sobre el medio ambiente. La inversión privada pudo ser mayor, así como su financiamiento, si no hubiera mediado el exceso de gasto fiscal en seguridad y justicia, la evasión fiscal y la fuga de capitales.

A lo largo de la década de 1990 el precio de la cocaína ha caído por la menor demanda en Estados Unidos. También la oferta ha disminuido por los decomisos y las menores áreas cultivadas en Perú y Bolivia. Por su parte, Colombia se convirtió en el principal proveedor mundial sustituyendo importaciones (por cultivos). Luego de la fragmentación de la industria de exportación, ésta se ha replegado a la etapa agroindustrial, con una creciente vinculación de los protagonistas del conflicto armado.

Alcanzar el primer puesto en la producción de cocaína, luego de erradicar casi el doble del área cultivada, hizo necesario replantear la estrategia colombiana antidrogas a través del Plan Colombia, mediante la integración de los esfuerzos de interdicción con los de recuperación económica, fortalecimiento institucional, desarrollo institucional, apoyo a la población más vulnerada y la paz negociada del conflicto armado con los grupos alzados en armas. De su puesta en práctica, las perspectivas del mercado y la industria en el mediano plazo podrían corresponder a los siguientes escenarios:

- *Sin PC.* Si el mercado mundial de la cocaína sigue sus tendencias recientes, los ingresos continuarán disminuyendo, en medio del crecimiento de los cultivos, la reestructuración de la industria hacia la fase agroindustrial, y la vinculación de los protagonistas del conflicto armado. Los menores ingresos no afectarían el funcionamiento macroeconómico, ni sectorial ni regional. También habría una reducción en las tasas de criminalidad. Sin embargo, los procesos de ahorro-inversión se verían afectados por la creciente inestabilidad sociopolítica, resultado de la endogeneidad del conflicto armado y el narcotráfico.
- *Con PC.* Con una solución pacífica al conflicto armado y una reducción de 50% del área de cultivos ilícitos, se introduciría un déficit de oferta de 270 toneladas en el mercado mundial de cocaína y también un repunte en el precio, lo que abriría posibilidades para las exportaciones de Perú y Bolivia. Habría una reducción de las utilidades repatriables por la cantidad de 900 millones

de dólares, es decir, 0.6% del PIB, las regiones cultivadoras y algunas actividades pertenecientes a la informalidad experimentarían una menor actividad económica. La perspectiva de una paz negociada y la reducción del área cultivada deberían acelerar el recorrido hacia la estabilidad sociopolítica, a lo cual debería contribuir la credibilidad en el cumplimiento de objetivos y la integralidad de las diferentes estrategias del PC; si los agentes no le otorgan credibilidad a las políticas de interdicción y de desarrollo alternativo, serían previsibles las adversas repercusiones de la pugna redistributiva (marchas campesinas y paros cívicos) sobre la estabilidad sociopolítica; si el PC excluyera del acuerdo de paz las protestas campesinas, aumentaría la escalada en el conflicto armado y la controversia internacional.

Sin ser el propósito de este ensayo la evaluación del PC, la mirada a los alcances de la estrategia de fortalecimiento institucional y desarrollo social (atención a la población vulnerable al conflicto y el programa de desarrollo alternativo) revela que ésta se realizará en condiciones muy diferentes a la experiencia de diversificación cafetalera y del resto de la región andina. Además, se señala que la cobertura de estos programas se encontrará inversamente asociada al vínculo narcotráfico-conflicto armado, y si éste se prolonga o profundiza, los presupuestos serán insuficientes ante las necesidades y menor su efectividad.

Finalmente, el desfavorable balance que el narcotráfico le ha representado a Colombia, revela que la ruptura de la endogeneidad entre el conflicto armado y el narcotráfico es el gran reto que enfrentan las políticas.

BIBLIOGRAFÍA

- Caballero, Carlos y Roberto Junguito (1978), “La otra economía”, *Coyuntura Económica*, vol. VIII, núm. 4, Bogotá, publicación de Fedesarrollo, diciembre.
- Cabieses, Hugo (compilador) (1999), *Desarrollo alternativo y desarrollo rural. Debate sobre sus límites y posibilidades*, Lima, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), agosto.
- ——— (2000), “Experiencias de desarrollo alternativo en el Perú: análisis y propuestas”, mimeo, Lima, estudio preparado para la División de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), septiembre.
- Castro, Manuel Fernando, Jorge Arabia y Andrés Celis (1999a), “El conflicto armado: la estrategia económica de los principales actores y su incidencia

- en los costos de la violencia 1990-1998”, en *Planeación & Desarrollo*, vol. xxx, núm. 3, Bogotá, Publicación del Departamento Nacional de Planeación, julio-septiembre.
- Castro, Manuel Fernando, Hugo Aristizábal y Juan Carlos Palou (1999b), “Conflicto, región y desarrollo en el suroriente colombiano”, en *Planeación & Desarrollo*, vol. xxx, núm. 3, Bogotá, Publicación del Departamento Nacional de Planeación, julio-septiembre.
 - Celis, Andrés (1999), “Las minas antipersonales. Posibilidades de acción en medio del conflicto”, en *Planeación & Desarrollo*, vol. xxx, núm. 3, Bogotá, Publicación del Departamento Nacional de Planeación, julio-septiembre.
 - Cubillos, Rafael (1997), *Impacto socioeconómico del sistema de preferencias SPG Andino de la Unión Europea*, Bogotá, Ministerio de Comercio Exterior y Departamento Nacional de Planeación.
 - Consultoría para el desplazamiento forzado y los derechos humanos (Codhes) (1999), *Un país que huye, desplazamiento y violencia en una nación fragmentada...*, Bogotá, UNICEF y Codhes.
 - Departamento Nacional de Planeación (2000), “Plan Colombia Institutional Strengthening and Social Development 2000-2002. Report to the Support Group for the Peace Process”, Bogotá, julio.
 - Echeverry, Juan Carlos y Zeinab Partow (1998), “¿Por qué la justicia no responde al crimen?: el caso de la cocaína en Colombia”, en Mauricio Cárdenas y Roberto Steiner (compiladores), *Corrupción, crimen y justicia: una perspectiva histórica*, Bogotá, Editores Tercer Mundo, Fedesarrollo y LACEA.
 - Erazo, Jaime, Ana María Ibáñez, Stefanie Kirchoff y Alberto Galán (1999), “Diversas causas y costos del desplazamiento ¿Quién los compensa?”, en *Planeación & Desarrollo*, vol. xxx, núm. 3, Bogotá, Publicación del Departamento Nacional de Planeación, julio-septiembre.
 - Fajnzylber, Pablo, Daniel Lederman y Norman Loayza (1999), “Inequality and violent crime” (mimeo), Conferencia internacional “Crimen y violencia: causas y políticas de prevención”, organizada por el Banco Mundial y la Universidad de los Andes, Bogotá, disponible en <www.worldbank.org>.
 - Giraldo, Fabio (1990), “Narcotráfico y construcción”, *Economía colombiana*, Bogotá, Publicación de la Contraloría General de la República, núms. 226-227, febrero-marzo.
 - Gómez, Hernando José (1988), “La economía ilegal en Colombia: tamaño, evolución, características e impacto económico”, *Coyuntura económica*, Bogotá, Publicación de la Contraloría General de la República, septiembre.

- ——— (1990), “El tamaño del narcotráfico y su impacto económico”, *Economía colombiana*, núm. 45, Bogotá, Publicación de la Contraloría General de la República, febrero-marzo.
- Granada Camilo y Leonardo Rojas (1995), “Los costos del conflicto armado 1990-1994”, *Planeación y Desarrollo*, vol. XXVI, núm. 4, Bogotá, Publicación del Departamento Nacional de Planeación, octubre-diciembre.
- Grogger, Jeff y Michael Willis (2000), “The emergence of Crack Cocaine and the Rise in Urban Crime Rates” (mimeo), Conferencia internacional “Crimen y violencia: causas y políticas de prevención”, organizada por el Banco Mundial y la Universidad de los Andes, enero.
- Hernández, Gustavo, Sergio Prada y Juan Mauricio Ramírez (2001), “Impacto económico del Programa de Desarrollo Alternativo del Plan Colombia”, mimeo, Bogotá, disponible en <www.dnp.gov.co>.
- Jaramillo, Carlos Felipe (1998), “La agricultura colombiana en la década de los 90”, *Revista de Economía del Rosario*, vol. I, núm. 2, noviembre.
- Kalmanovitz, Salomón (1990), “La economía del narcotráfico en Colombia”, *Economía colombiana*, núms. 226-227, Bogotá, Publicación de la Contraloría General de la República, febrero-marzo.
- ——— (1992), “Análisis macroeconómico del narcotráfico en la economía colombiana”, mimeo, Bogotá, Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), Universidad Nacional de Colombia, diciembre.
- Krugman, Paul y Maurice Obstfeld (1999), *Economía internacional, teoría y política*, Barcelona, Editorial McGraw Hill, cuarta edición.
- Leibovich, José, Hernando José Gómez y Silvia Reyes (1993), “Diagnóstico de la diversificación cafetalera”, en *Economía cafetalera, crisis y perspectivas*, Universidad Javeriana/DNP/FONADE.
- Levitt, Steven y Sudhir Venkatesh (1998), “An Economic Analysis of a Drug Selling Gang’s Finances”, *NBER Working Paper Series* WP, 6592. Disponible en <http://www.nber.org/papers/w6592>.
- Mesa, Fernando (1997), “Efectos de la descertificación de los Estados Unidos a Colombia”, mimeo, Bogotá.
- Molina, Pablo (1995), “Illegal Drug Trafficking and Economic Development in Colombia”, Thesis for Ph. D. in Economics in the University of Illinois, Urbana-Champaign.
- Montenegro, Armando, Carlos Esteban Posada y Gabriel Piraquive (1999), “Violencia, criminalidad y justicia: otra mirada desde la economía”, en Astrid Martínez (compiladora), *Economía, crimen y conflicto*, Bogotá, Banco Santander Central Hispano/Universidad Alcalá de Henares/Universidad Nacional de Colombia.

- Muggah, Robert (2000), “Capacidades institucionales en medio del conflicto: una evaluación de la respuesta en la reubicación de la población desplazada en Colombia”, mimeo, disponible en <www.dnp.gov.co>.
- Office of National Drug Control Policy (ONDCP) (2000), “The National Drug Control Strategy: 2000 Annual Report”, mimeo, disponible en <www.whitehousedrugpolicy.gov>.
- Parra, Clara Helena (1998), “Determinantes de la inversión en Colombia: evidencia sobre el capital humano y la violencia”, *Planeación y Desarrollo*, vol. XXIX, núm. 5, Bogotá, Publicación del Departamento Nacional de Planeación, julio-septiembre.
- Reyes, Alejandro (1997), “Compras de tierras por narcotraficantes”, en *Drogas ilícitas en Colombia*, Santa Fe de Bogotá, D.C., PNUD/DNE/Ariel Ciencia Política, mayo.
- Rocha, Ricardo (2000), *La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico*, Bogotá, Editorial Siglo del Hombre/UNDCP.
- ——— (1997), “Aspectos económicos de las drogas ilegales en Colombia”, en *Drogas ilícitas en Colombia*, Santa Fe de Bogotá, D.C., PNUD/DNE/Ariel Ciencia Política, mayo.
- Rubio, Mauricio (1995), “Crimen y crecimiento en Colombia”, mimeo, Bogotá Universidad de los Andes.
- Sánchez, Fabio y Jairo Núñez (2000), “Determinantes del crimen violento en un país altamente violento: el caso de Colombia”, en Astrid Martínez (compiladora), *Economía, crimen y conflicto*, Bogotá, Universidad Alcalá de Henares/Universidad Nacional de Colombia, septiembre.
- Sarmiento, Eduardo (1990), “Economía del narcotráfico”, *Desarrollo y Sociedad*, Bogotá, Publicación de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, septiembre.
- ——— (1991), “Precisiones a la economía del narcotráfico”, *Desarrollo y Sociedad*, Bogotá, Publicación de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, marzo.
- Sarmiento, Libardo y Carlos Moreno (1990), *Economía colombiana*, núms. 226-227, Bogotá, Publicación de la Contraloría General de la República, febrero-marzo.
- Steiner, Roberto (1997), “Los dólares del narcotráfico”, *Cuadernos de Fedesarrollo*, núm. 2, Bogotá, Tercer Mundo Editores, septiembre.
- Thoumi, Francisco (1994), *Economía, política y narcotráfico*, Bogotá, Tercer Mundo Editores, primera edición, mayo.

- ——— (2000), “Ventajas competitivas de las drogas ilegales en los países andinos: el Estado, las instituciones sociales y el capital social”, *Coyuntura Social*, Bogotá, Publicación de Fedesarrollo.
- Uribe, Sergio (1997), “Los cultivos ilícitos en Colombia”, en *Drogas ilícitas en Colombia*, Santa Fe de Bogotá, PNUD/DNE/Ariel Ciencia Política, mayo.
- Urrutia, Miguel (1990), “Análisis costo-beneficio del tráfico de drogas para la economía colombiana”, *Coyuntura Económica*, Bogotá, Publicación de Fedesarrollo, octubre.
- Vélez, María Alejandra (2000), “FARC-ELN: evolución y expansión territorial”, Bogotá, Publicación de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Documento CEDE 2000-08.